

CRIMINAL **2018** GAMECHANGERS

InSight Crime da una mirada al 2018, un año en el que el crimen organizado se volvió más ágil que nunca, mientras que las repuestas gubernamentales fueron torpes y repetitivas.

CRIMINAL GAMECHANGERS

2018

Tabla de contenidos

El año en el que el crimen se volvió ideología	3
Cambios políticos en Colombia y México y sus adversas perspectivas	9
La arremetida de las élites en Centroamérica	15
Migración venezolana, un nuevo filón para el crimen organizado.....	21
América languidece, mientras los opioides y la cocaína florecen	27
Los 'ganadores' del crimen en Latinoamérica	34
5 razones por las que el crimen organizado crecerá en Latinoamérica en 2019.....	42

1

El año en el que el crimen se volvió ideología

Escrito por Steven Dudley y Jeremy McDermott



InSight Crime presenta su publicación anual GameChangers 2018, en la que analizamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el año. Desde el aumento de la oferta de las drogas ilícitas, pasando por el resurgimiento de grupos criminales monolíticos, hasta el debilitamiento de los programas anticorrupción y una ola de respuestas militarizadas frente al crimen, 2018 fue un año en el que los asuntos políticos continuaron enmarcados en la dicotomía izquierda-derecha, pero la única ideología que importó fue la del crimen organizado.

Algunas de las peores noticias se dieron en Colombia, donde la producción de coca y cocaína alcanzó **niveles récord** en un año más de malas noticias con respecto al histórico **acuerdo de paz** con la insurgencia política más antigua de la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La desmovilización de los miembros de las ex-FARC ha estado plagada de ineptitud gubernamental, **corrupción**,

violaciones a los [derechos humanos](#) y [acusaciones](#) de que los altos dirigentes de la guerrilla están implicados en el narcotráfico. Y ello pudo haber contribuido directa e indirectamente al aumento de la producción de coca y cocaína.

En medio de esta tumultuosa situación, en el mes de mayo Colombia eligió como presidente al político de derechas Iván Duque, protegido de Álvaro Uribe, quien fue presidente del país y actualmente es senador de la república. Su alianza podría afectar no solo [lo que queda](#) del acuerdo de paz, sino toda la criminalidad del país; en efecto, durante 2018 los [disidentes de las ex-FARC](#) reestablecieron antiguos feudos criminales o se aliaron con otras facciones delincuenciales, y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), [llenó](#) los vacíos de poder en Colombia y en la vecina Venezuela, lo que lo convierte en uno de los tres grupos criminales que consideramos ganadores este año. Por otro lado, ha surgido [una nueva generación de traficantes](#), que prefiere el anonimato a los grandes y llamativos ejércitos violentos del pasado.

También es de resaltar el aumento que se presentó en 2018 en las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. El flagelo de este opiáceo sintético causó más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga. El fentanilo ya no se consume como sustituto de la heroína, sino que aparece oculto en píldoras de prescripción médica falsificadas y mezclado con cocaína y con medicamentos no aprobados. Se produce en China, y aunque [gran parte](#) de la droga se transporta a través del sistema postal estadounidense, otra parte [atraviesa México](#) en su recorrido hacia Estados Unidos. Durante 2018, los grupos criminales de México parecieron haber orientado sus operaciones cada vez más en torno a esta droga, especialmente dada su creciente popularidad, disponibilidad y rentabilidad. Como resultado, se están dando algunas alianzas que podrían cambiar las reglas del juego, [sobre todo](#) entre las organizaciones criminales mexicanas y dominicanas.

Una de estas estructuras criminales mexicanas es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de los tres grupos criminales que consideramos ganadores en 2018. El CJNG ha evadido los intentos por debilitarlo [mediante](#) diversas estrategias, como sofisticadas relaciones públicas y tácticas militares, y además las circunstancias le han sido favorables —el gobierno ha estado demasiado [distráido](#)—. Ello no significa que sea [invulnerable](#). En 2018, el grupo dio algunos [duros golpes](#) en su bastión, por lo que las autoridades estadounidenses lo pusieron en su radar, lanzando una serie de acusaciones contra la organización.



Trump se pone una gorra con el lema "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande"
AP Photo/Jae C. Hong

Los carteles de México se enfrentaron entre sí, incluso mientras aprovechaban las lucrativas economías criminales. El resultado se hizo evidente en los [niveles récord](#) de homicidios de este año. El deterioro de la seguridad allanó el camino para la elección del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio. AMLO, como se le conoce afectuosamente, no basó su campaña precisamente en los asuntos de seguridad, pero quizá ganó gracias a ellos, y de paso heredó de su predecesor un cáliz de seguridad envenenado:

mientras que Peña Nieto puede **afirmar** que durante su gobierno fueron arrestados o asesinados 110 de los 122 cabecillas criminales, AMLO se enfrenta a más de mil futuros líderes y a cientos de grupos criminales.

El aumento de la oferta de cocaína y fentanilo afectó enormemente a Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo. Pero 2018 demostró que la era en que Estados Unidos utiliza la política de drogas como un arma de su política exterior puede estar llegando a su final. En vísperas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, el “llamado a la acción” por parte de la administración Trump —que consistía en una estrategia apoyada en cuatro pilares— no tuvo **el suficiente apoyo** de otros países de la región. Por el contrario, Canadá **legalizó** la marihuana, y el recién electo presidente de México ha considerado **alejarse radicalmente** de la estrategia de mano dura que promueve la administración Trump.

“Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario favoreciendo al crimen organizado”

Aun así, los dos años de la extraña y caótica política exterior de Donald Trump han tenido un impacto devastador en las relaciones exteriores en la región y han allanado el camino para el crimen organizado transnacional. En primer lugar, la administración Trump ha abandonado prácticamente todos los programas que por años se han adelantado contra la corrupción en Centroamérica, al tiempo que su administración enfrenta constantes acusaciones de corrupción al interior de su propio régimen.

Específicamente, 2018 será recordado como el año en que el gobierno de Estados Unidos **dejó de apoyar** a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la fiscalía adjunta respaldada por la ONU en ese país. Durante casi 10 años de labor, los casos liderados por la CICIG han llevado a la cárcel a presidentes, vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales, exministros, banqueros, dueños de hoteles y muchas personas más. Pero este año, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales —quien también está siendo **investigado** por la CICIG— comenzó a **presionar** a la Casa Blanca y a sus aliados directamente, y de esta manera logró reunir una coalición de miembros de las élites que han sido acusados, **marginar** a la CICIG y **exiliar** a su reconocido comisionado colombiano, pese a la **presión** del Congreso de Estados Unidos para que se mantenga el respaldo judicial en el país.

Otros mandatarios han emprendido un juego similar; en particular, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado neutralizar la versión de la CICIG en ese país: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En el mes de febrero, Juan Jiménez Mayor, director de la MACCIH, **renunció** sorpresivamente. En una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Jiménez explicó que dimitió debido a la falta de apoyo del progenitor de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a los esfuerzos concertados del Congreso hondureño por debilitar la misión. Tanto **Honduras** como Guatemala han debido enfrentar **desafíos constitucionales** para los mandatos de la MACCIH y la CICIG. Sin embargo, como signo positivo, la **reelección** del fiscal general de

Honduras, cuya gestión ha sido relativamente buena, puede hacer que las intenciones de neutralizar los programas anticorrupción allí sean infructuosos, sobre todo en lo que respecta a una investigación que está siguiendo muy de cerca al propio presidente Hernández.

Nada de esto parece molestar a Trump, quien durante 2018 se dedicó casi permanentemente a una campaña política en Estados Unidos, en especial en torno a la diversidad de inmigrantes que huyen de la violencia de los grupos criminales que los asedian, como la Mara Salvatrucha (MS13) —un tema que abordamos en nuestra [investigación](#) de tres años de duración sobre la pandilla—. Y lo que es peor aún, las políticas fronterizas de Trump están por el contrario [favoreciendo](#) al crimen organizado. Y su administración parece haber abandonado toda intención de defender los derechos humanos o la libertad de prensa, a pesar de que la región sigue siendo el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo, sobre todo debido al crimen organizado, la corrupción y la impunidad que promueven aliados de Estados Unidos como Morales y Hernández.

De hecho, la indiferencia de Trump frente a la ley, el orden y la verdad permitió el avance de la demagogia, lo cual fue muy evidente en Brasil, donde el triunfo de la derecha fue más rotundo que en Colombia. Después de ser apuñalado durante una manifestación política, el populista militar-evangélico Jair Bolsonaro —quien ha sido descrito como un “Donald Trump brasileño”— [ascendió](#) en el camino a la presidencia con base en una plataforma racista y xenófoba que [incluye](#) sentencias de prisión más largas, militarización de la guerra contra el crimen, y el retroceso en los esfuerzos regionales por legalizar ciertas sustancias ilegales.

Pero a juzgar por lo que ocurrió en 2018, lograr mayor seguridad en Brasil —donde en 2017 [se registró](#) el asombroso récord de 63.880 homicidios— puede no resultar tan fácil, incluso aunque la solución que Bolsonaro propuso goza de [popularidad](#). Durante 2018 se presentó otra ola de combates en diferentes partes del país, incluyendo una [serie de enfrentamientos](#) entre la Familia del Norte y el Comando Rojo, que puso fin a un pacto de tres años de duración entre los dos grupos. Sin embargo, el Primer Comando Capital (PCC) fue el que continuó planteando la mayor amenaza, [expandiéndose](#) tanto dentro de Brasil como en otras partes de la región, lo que lo ubica en el primer puesto de nuestra lista de ganadores criminales de 2018.

Irónicamente, el gobierno izquierdista de El Salvador fue el que más se asemejó en 2018 a la estrategia militarista de Bolsonaro en su lucha contra el crimen. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dio [luz verde](#) para una estrategia de línea dura que recuerda a muchos de los regímenes que la misma guerrilla del FMLN combatió en el pasado, antes de convertirse en un movimiento político. En 2018, el partido además [codificó](#) sus medidas más draconianas y ofreció abundante [protección](#) a los autores intelectuales de las más atroces violaciones a los derechos humanos, incluso a pesar de que los [resultados](#) de dichas medidas fueron mediocres.

Por otra parte, durante 2018, pandillas como la MS13 demostraron su capacidad para [adaptarse](#) y para mover su músculo político de maneras sorprendentes, sobre todo en la capital, San Salvador. El exalcalde de la ciudad, Nayib Bukele, quien es actualmente

uno de los principales candidatos en la contienda presidencial —y quien ha sido un camaleón político, pasando de la izquierda en el FMLN a un pequeño partido rival de derecha— llevó a cabo una [negociación](#) con las pandillas, de modo que pudo empezar a remodelar el centro histórico de la ciudad y transformarlo en un área que acogiera más a las familias —o por lo menos a la moda y los turistas—. De cierta manera, su estrategia funcionó, dado que la violencia disminuyó, el centro obtuvo algunas de las necesarias mejoras estructurales, y se abrieron nuevos negocios. La [disminución](#) en los homicidios durante este año indica que el FMLN y otros operadores políticos también pueden haber notado los resultados y quizá están tratando de darles un lugar a las pandillas, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales de febrero.

Más hacia el centro del espectro político se ubicó Costa Rica, que en el mes de abril [eligió](#) como presidente a Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de orientación centroizquierda. Allí, las elecciones al parecer no respondieron a la seguridad ciudadana, de la que quizá sí pueda depender la supervivencia de la administración del nuevo presidente. Las tasas de homicidios han llegado a niveles récord, sobre todo [porque](#) Costa Rica está desempeñando un papel cada vez más importante en la actividad criminal transnacional, pero quizá también porque en 2018 se observó que las fuerzas de seguridad del país pueden estar [involucradas](#) en el crimen ahora más que nunca.

En un espectro político propio se ubicó el venezolano Nicolás Maduro, quien fue reelegido en abril en un ejercicio que pareció confirmar que desde hace mucho tiempo ha desechado cualquier pretensión de democracia. Como lo describimos en una [investigación](#) especial publicada en varias secciones, Venezuela se ha convertido efectivamente en un vehículo para los intereses criminales. Las [razones](#) para ello tienen que ver con la aparición de grupos criminales propios que se encuentran tanto [al interior](#) del gobierno como [vinculados](#) a él, pero además con la abdicación de las funciones del Estado, especialmente en lo que se refiere a las [prisiones](#), y con la muerte de todo sistema económico viable, lo que facilita la corrupción y la ineptitud que prevalecen en el gobierno de Maduro.

Como resultado de todo lo anterior, el caos no se dejó esperar en 2018, y miles de refugiados se lanzan diariamente a otros países. La crisis de los [refugiados](#), que no tiene precedentes, trajo consigo desesperación e, inevitablemente, más [crimen organizado](#). En pocas palabras, en 2018 Venezuela se convirtió en un [epicentro regional del crimen](#), un lugar donde se vende de todo, desde [combustible robado](#) hasta [adolescentes](#) y [alimentos descompuestos](#), y donde la competencia está en todos los ámbitos. Y al gobierno no parece importarle. Su solución consistió en lanzar una criptomonedas vinculada a su industria petrolera en quiebra, al mismo tiempo que la primera dama enfrentaba acusaciones de narcotráfico.

En medio de las fuertes disputas políticas de suma-cero, hay un caso aparte, incluso una luz de esperanza. En 2018, Argentina pareció estar buscando cierto justo medio en la batalla contra el crimen. El gobierno impulsó mejoras en la recolección de datos y la recopilación de inteligencia, a la vez que [aumentó](#) sus estadísticas de arresto y confiscación. Implementó además un programa de policía comunitaria, aunque [coqueteó](#) con el uso de una estrategia militarizada a lo largo de las fronteras y en otros sitios.



Los venezolanos aglomerados en la frontera colombo-venezolana se han convertido en los principales objetivos de los grupos criminales
AP Photo/Ariana Cubillos

Los resultados han tenido sus más y sus menos. El desmantelamiento y el juicio de uno de los grupos criminales más violentos del país, por ejemplo, fueron eclipsados por la permanente capacidad de dicho grupo para operar desde la cárcel. Y la nueva ley de negociación de culpabilidad abrió puertas para la [corrupción oficial](#), sobre todo entre los políticos vinculados al antiguo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Como expresó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante una [entrevista](#) con InSight Crime en 2018, el plan del gobierno es casi perfecto. “Nosotros planteamos lo que llamamos el modelo 80/20: 80 por ciento de inteligencia, 20 por ciento de casualidad”, dijo.

En 2018, este fue un comentario gratamente sincero, un reconocimiento de que no todos los programas son como se anuncian.

Imagen destacada: Agentes de policía caminan entre paquetes de cocaína incautados en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano
AP Photo/Fernando Vergara

2

Cambios políticos en Colombia y México y sus adversas perspectivas

Escrito por James Bargent y Tristan Clavel



Las elecciones presidenciales en los dos países que se encuentran en el centro del comercio de drogas de Latinoamérica dieron pie a cambios significativos en 2018: los colombianos respondieron al auge de la cocaína en el país eligiendo al candidato que propone retomar las políticas de seguridad de línea dura, mientras que los mexicanos reaccionaron a los altos niveles de violencia eligiendo al que promete reducir la “guerra contra las drogas”.

Sin embargo, dadas las falencias de los planes de seguridad de las dos nuevas administraciones y la actual política exterior de Estados Unidos, que es más un comodín que un socio firme en materia de seguridad, estos divergentes caminos políticos podrían generar más inestabilidad en la región, lo que a su vez puede favorecer al crimen organizado.

El drástico cambio de dirección en Colombia

Colombia fue el primero de los dos países en celebrar comicios, los cuales se llevaron a cabo a mediados de junio de 2018, y en los que salió victorioso Iván Duque, candidato del partido de derecha Centro Democrático. El nuevo presidente [hereda una inestable situación de seguridad](#), en la que los niveles récord de producción de cocaína coinciden con una violenta evolución de los grupos criminales.

La magnitud del reto al que se enfrenta Duque se hizo más evidente pocos días después de su victoria, cuando [Estados Unidos publicó estimaciones](#) según las cuales los cultivos de coca en Colombia aumentaron 11 por ciento en 2017, en comparación con el año anterior. Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicadas en el mes de septiembre, mostraron un [aumento incluso mayor](#), del 17 por ciento, pues las estimaciones de producción de cocaína llegaron a un histórico nivel de casi 1.400 toneladas.

Para enfrentar la expansión aparentemente inexorable del cultivo de coca, Duque ha propuesto volver a implementar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Las fumigaciones aéreas fueron uno de los pilares de la política antinarcóticos de la administración del padrino político de Duque, Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, pero la práctica fue [suspendida](#) en 2015 debido a que puede afectar la salud pública.

Duque ha prometido hacer que la sustitución de cultivos ilícitos sea obligatoria, y no voluntaria. Pero la historia de Colombia ha demostrado que la erradicación de los cultivos de drogas a gran escala permite a lo sumo obtener logros a corto plazo. A mediano plazo conduce a la [dispersión](#) de los cultivos de coca, en lugar de su erradicación, y en el largo plazo es [insostenible](#), dado que no hace nada para cambiar las condiciones que incentivan el cultivo de coca.

Además del auge de la coca, Duque tendrá que lidiar con el deterioro del divisivo acuerdo de paz que se firmó en 2016 entre el Gobierno y los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A medida que más excombatientes de las FARC abandonan el proceso de desmovilización, y en tanto [crecen las divisiones entre los exdirigentes de la guerrilla](#), los grupos de la mafia ex-FARC han irrumpido por todo el país, disputándose los antiguos territorios de las FARC con otros actores criminales.

Durante su campaña electoral, Duque culpó de estas crisis al entonces presidente Juan Manuel Santos, y prometió resolverlas mediante duras políticas muy similares a las del expresidente Uribe, quien en los primeros años de este siglo llevó a Colombia por el camino de la militarización de la lucha contra el crimen organizado.

Durante su campaña, Duque también hizo mucho énfasis en la necesidad de modificar los acuerdos con las FARC, a los cuales se han opuesto tajantemente Uribe y su partido del Centro Democrático desde que comenzaron las conversaciones de paz. Sin embargo, esto podría ser bastante contraproducente. Debilitar el acuerdo con las FARC podría aumentar las alarmantes tasas de abandono del proceso de paz entre los excombatientes, y a la vez promovería la expansión de la mafia de las ex-FARC, dado que muchos excombatientes regresarían al crimen.

5 retos en seguridad y crimen del nuevo presidente de Colombia



1 El boom de la coca

- Nuevo récord en producción:** Pasó de 188 mil hectáreas en 2016 a 209 mil hectáreas en 2017.
- La disputa por la hoja:** Varios actores criminales han buscado controlar los cultivos y llenar el vacío de poder.
- Zonas calientes:** El narcotráfico se ha intensificado en el Pacífico, el Catatumbo y los Llanos orientales.

2 La FARC entre la paz y las disidencias

- Disidentes:** Aumentan por las dificultades en el proceso de paz. Podrían llegar a 2 mil hombres.
- Disidencias criminales:** Algunas ya no son ejército revolucionario. Las GUP buscan control del comercio de droga.
- El Frente Primero:** Busca alianzas para narcotráfico. Gentil Duarte envió representantes a Cauca, Nariño y Putumayo.

3 El ELN más fuerte y más grande

- Expansión y fortalecimiento:** Fortaleció su presencia en 85 municipios y se expandió a otros 32.
- División interna:** Las diferencias internas en esta guerrilla dificultan un posible acuerdo de paz.
- Actividad militar y narcotráfico:** Mantiene acciones armadas y actividades criminales. El enfrentamiento con el EPL es un punto grave.

4 Corrupción de toga y corbata

- Corrupción evolucionada:** Es más clandestina y por tanto más difícil de identificar.
- Impunidad:** Ha permitido que la corrupción tenga vida propia.
- Intercambio de favores:** Hay una puerta giratoria que facilita protección legal y lleva a más impunidad.

5 Venezuela, un vecino incómodo

- Migración masiva:** 35.000 venezolanos cruzan la frontera diariamente y 4.000 se quedan en Colombia.
- "Refugio" de grupos irregulares:** Gobierno de Venezuela tolera la presencia del ELN y disidencias de las FARC.
- Más soldados para grupos criminales:** Venezolanos desesperados por la crisis son reclutados por guerrilla y mafia.

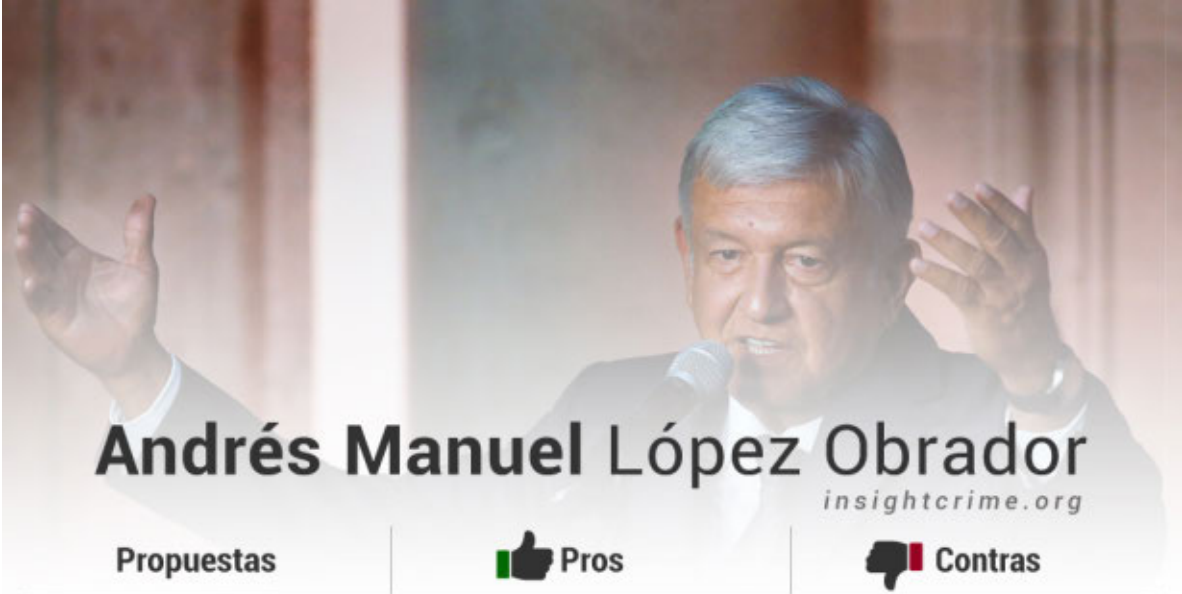
El proceso de paz con las FARC no es el único al que Duque le debe prestar atención. El mandatario anunció además que redefiniría los términos de la negociación con el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero la **actitud intransigente** del presidente hacia el ELN puede resultar contraproducente, pues llevaría a que las facciones guerrilleras regionales **se retiren** del proceso de paz y podría acabar por completo con el mismo. Dado que los guerrilleros están aprovechando la retirada de las FARC y la **crisis venezolana** para expandirse territorialmente y aumentar su participación en el comercio de drogas, la interrupción del proceso de paz en Colombia podría llevar a que la insurgencia aumente su poder y sus riquezas, y a que considere que el camino hacia la paz ha quedado bloqueado.

La encrucijada de México

Dos semanas después de la elección de Duque, México eligió al perenne candidato presidencial de izquierda, el populista Andrés Manuel López Obrador, más conocido por sus iniciales, AMLO. Los resultados de las elecciones en México aparentemente pusieron al país en un camino opuesto al de Colombia.

AMLO heredó una situación de seguridad que refleja uno de los principales fracasos del paradigma de la guerra contra las drogas, aún prevalente en el país. Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón expandió el papel del ejército en la lucha contra el crimen, los grandes capos del hampa mexicano [han sido capturados](#), y la mayoría de los poderosos carteles que anteriormente dominaron el narcotráfico ya son solo sombras de lo que alguna vez fueron. Pero las drogas continúan fluyendo y la violencia está alcanzando [niveles récord](#) una vez más, pues han surgido nuevos contendientes, más dispersos y fragmentados, que se han apoderado del negocio de los antiguos carteles.



Andrés Manuel López Obrador
insightcrime.org

Propuestas	 Pros	 Contrás
Promulgar políticas progresistas frente a las drogas	México podría convertirse en líder regional de la despenalización y la legalización	Podría no tener un impacto inmediato en la seguridad o en la dinámica criminal de México
Otorgar amnistía a los criminales	Disminución del hacinamiento en las prisiones ; incentivos para el abandono de la criminalidad	Políticamente inviable ; posibilidad de que se cometan abusos
Acabar con la corrupción generalizada	Erradicar la corrupción permitirá eliminar otros problemas de seguridad	Es un reto demasiado grande para que se alcance en una administración
Elegir un fiscal general autónomo	Podría ayudar a controlar la alta tasa de impunidad criminal en México	López Obrador planea elegir por sí mismo al próximo fiscal

Durante su campaña electoral, AMLO propuso una serie de políticas de lucha contra el crimen que representan una radical ruptura con las del pasado reciente. La concepción de seguridad del entrante presidente mexicano es mucho más progresista que la de Duque en Colombia, pero no carece de defectos. Quedan serias dudas acerca de si AMLO puede reunir los recursos y la voluntad política necesaria para implementar sus políticas predilectas.

Entre estas se encuentra la de retirar al ejército de la lucha contra el crimen organizado. También ha propuesto indultar a las personas dedicadas al microtráfico, y está considerando la despenalización de las drogas como parte de un movimiento que busca tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un delito.

Sin embargo, desde entonces, AMLO parece haber reconsiderado su posición sobre el rol del ejército en los operativos de seguridad pública. Su proyecto de presupuesto para 2019 tiene un considerable aumento del gasto militar, prevé la creación de una nueva Guardia Nacional y recorta los recursos de seguridad local y estatal. Esto pone al Ejército en el centro de los planes de AMLO para combatir el crimen organizado, especialmente porque las unidades de policía estatales y municipales de México cuentan en general con personal poco apto (eso sin mencionar la corrupción en su interior) para enfrentar a los violentos carteles sin la ayuda de las fuerzas armadas. De hecho, los Marines de México son quienes han llevado a cabo muchas de las principales detenciones de los miembros del crimen organizado en los últimos años.

Otras de sus propuestas, como la despenalización del consumo de drogas y la amnistía para quienes han cometido delitos menores relacionados con drogas, requerirán una considerable voluntad política y apoyo popular. Y aunque se sabe que AMLO es populista, ha demostrado una y otra vez que tiene una vena pragmática que podría surgir ahora, especialmente tratándose de un asunto tan álgido como la seguridad. Además, su partido opera en una coalición relativamente frágil, en la que confluyen diversos intereses que tal vez no quieran invertir capital político en medidas que han demostrado ser fallidas.

También quedan dudas acerca del compromiso de AMLO con otro componente de su plataforma de campaña: la lucha contra la corrupción. Ha iniciado una disputa pública con jueces y fiscales para recortar sus salarios y presupuestos. El presidente electo ha rechazado las solicitudes de que el nuevo fiscal general sea elegido de manera imparcial, y al parecer está planeando elegir a dedo al próximo fiscal general del país. Los expertos independientes señalan que los fiscales generales que son nombrados por intereses políticos carecen de la independencia necesaria para adelantar las investigaciones de corrupción hasta sus últimas consecuencias, por lo que quedan dudas acerca de las promesas de AMLO de sanear la sucia política mexicana.

Direcciones opuestas, pero con un mismo obstáculo

Mientras Colombia retoma políticas de seguridad que ya habían sido implementadas anteriormente para abordar sus problemas de crimen organizado, México parece estar buscando experimentar nuevas estrategias. Pero ambos países tendrán el desafío de cooperar —o no— con la voluble administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La relación de Colombia con Estados Unidos fue tensa durante los últimos años de la presidencia de Santos, predecesor de Duque. Las tensiones crecieron el año pasado, cuando Trump [amenazó con calificar](#) a Colombia como un Estado que incumple sus obligaciones internacionales en materia antinarcóticos.

Sin embargo, por ahora la situación parece más positiva para Duque. Poco después de los comicios, el presidente electo [visitó la ciudad de Washington](#), donde se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca para discutir temas de seguridad, como el auge de las drogas y la crisis en la vecina Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump parece dispuesto a apoyar las políticas de seguridad de Duque —al menos retóricamente—. Pero será difícil convencer a Trump y a sus aliados de que respalden el enorme [apoyo financiero](#) y logístico que se requiere para impulsar las principales iniciativas de seguridad. Trump [ha expresado su insatisfacción](#) con el auge de la coca en Colombia, y [ha abogado por grandes recortes](#) a la ayuda de Estados Unidos para Colombia y [otros países](#) latinoamericanos.

A diferencia de la agenda de Duque, muchas de las posturas progresistas de AMLO van en sentido contrario de las concepciones de Trump. Sin embargo, eso no ha impedido que el entrante presidente mexicano busque el apoyo de Estados Unidos. En julio de este año, por ejemplo, [AMLO publicó una carta](#) que le había enviado a Trump, en la que pedía mayor cooperación en ciertos aspectos clave, entre ellos la seguridad.

Sin embargo, a pesar de algunos indicios [superficiales](#) de simpatía entre los dos políticos populistas, la volubilidad de Trump y la férrea personalidad de AMLO podrían dar pie a una conflictiva relación bilateral —especialmente en lo que respecta a la seguridad, que generará debates tan intensos como los que existen en áreas candentes como la migración y el comercio—.

Manejar las relaciones con el voluble presidente de Estados Unidos será una tarea difícil y permanente tanto para Duque como para AMLO. Pero lograr coherencia en las relaciones cotidianas en temas de seguridad y diplomacia puede resultar aún más difícil, dado que la presidencia de Trump ha dejado las instituciones de política exterior a la deriva.

El mejor ejemplo de esto último es el Departamento de Estado de Estados Unidos. El [caótico reajuste](#) y el abandono deliberado del Departamento por parte de la administración —así como el resultante [éxodo masivo](#) de personal experto— han dejado sin timón a la principal institución de la política exterior estadounidense. Tal parálisis podría afectar gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mientras Colombia busca contener el auge de la cocaína con fallidas políticas del pasado, y México abre un nuevo capítulo en los viejos conflictos con los carteles, ambos países tendrán que lidiar con un socio importante pero errático que podría estropear incluso los planes mejor establecidos. Esta dinámica podría generar una falta de coordinación regional que resultaría benéfica para el crimen organizado.

Imagen principal: Andrés Manuel López Obrador (Izquierda) e Iván Duque (Derecha)

Imagen: InSight Crime / AP Photos Fernando Vergara y Marco Ugar

3

La arremetida de las élites en Centroamérica

Escrito por Héctor Silva Ávalos



Después de 2018, dos cosas han quedado claras: el blindaje otrora impenetrable que el apoyo de Estados Unidos y otros donantes internacionales proveían a los esfuerzos anticorrupción en la región se ha debilitado; y las élites políticas y económicas de Centroamérica no están dispuestas a permitir que una comisión internacional, una fiscalía o investigadores independientes se les metan hasta la cocina.

Esta imagen resume el año: el presidente guatemalteco Jimmy Morales rodeado de dos docenas de militares uniformados al anunciar su intención de librarse de las investigaciones en su contra.

Era agosto y la batalla que libraba Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocupó buena parte del año y sigue inconclusa, estaba en su punto más candente. Morales se quejaba de la CICIG por la investigación que la comisión había hecho sobre la campaña que lo llevó a la victoria en 2015.

Para fin de año, tras varias ofensivas políticas y diplomáticos contra la comisión, el gobierno guatemalteco quitó las visas a 11 de sus investigadores más importantes y anunció que los expulsaría del país.

Como reportó InSight Crime en una [investigación](#) especial sobre el presunto financiamiento electoral ilícito atribuido al presidente, el poder de Jimmy Morales descansa en la alianza de poderosos exmilitares, evangélicos y empresarios de los grupos tradicionales de poder que lo auparon a la presidencia. Al final, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) de Guatemala terminaron involucrando, como sospechosos, a representantes de todos esos grupos.

"No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas"

Morales, por supuesto, no está solo. El cierre de filas de las élites cuestionadas en Guatemala también fue evidente en El Salvador y Honduras, los otros dos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras [renunció el jefe del ente internacional anticorrupción](#) en parte por bloqueo de las élites políticas. Y En El Salvador, la prevalencia de mafias políticas de izquierda y derecha ha logrado neutralizar los incipientes esfuerzos anticorrupción en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia.

Lejos quedó, este año, el entusiasmo que procesos judiciales e investigaciones criminales contra expresidentes y empresarios enredados en complejas tramas de corrupción y saqueo al erario despertaron en los tres países en años anteriores. No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas.

Guatemala: la corrupción, el sello de la política

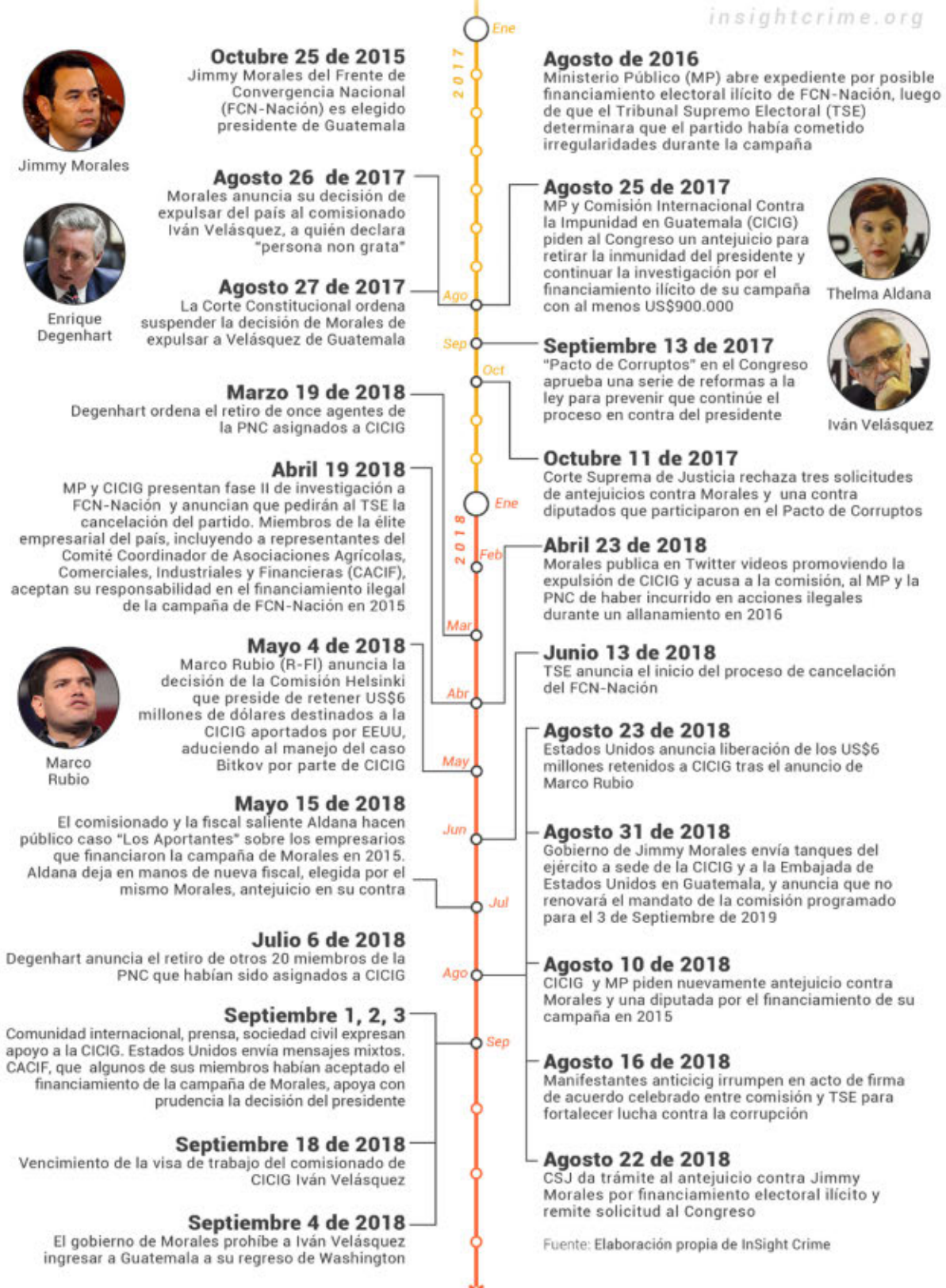
Si hay un contrincante del presidente Jimmy Morales en esta batalla es Iván Velásquez, el juez colombiano y comisionado de la CICIG, el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas que ayuda al ministerio público a investigar y a llevar casos a juicio. Al principio del año, [el juez dijo](#) a InSight Crime que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en la política guatemalteca, y luego salió a comprobarlo.

Su oficina y el MP removieron, en los últimos dos años, los cimientos de la política de Guatemala al develar las conexiones del ya extinto Partido Patriota y del gobernante partido de Morales, FCN-Nación, con las redes de corrupción política y empresarial que han embaucado y secuestrado al Estado guatemalteco por décadas. Esas investigaciones también dejaron al descubierto el rol de las élites económicas de viejo cuño en el tinglado.

Morales no se quedó quieto. A los afanes del presidente se unió la cruzada del expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú, quien hizo frente común con Morales para desprestigiar a la CICIG e intentar cercarla. Morales también trató de controlar el siguiente paso de cualquier investigación en su contra seleccionando una fiscal afín a sus intereses para dirigir el Ministerio Público.

Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba. Arzú **murió** en abril, y el 10 de agosto la nueva fiscal, Consuelo Porras, solicitó al sistema judicial un nuevo antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.

El camino que llevó a la "salida" del comisionado de la CICIG de Guatemala



Los eventos llegaron a su culminación en agosto con Morales y Velásquez rodeados por militares, pero en el caso del colombiano estaban alrededor de la sede de la CICIG con el objetivo de escoltarlo fuera del país. El comisionado colombiano se quedó, pero Morales anunció que no renovarían el mandato de la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019.

A continuación, aprovechando que Velásquez salió de gira hacia los Estados Unidos en busca de más respaldo, [Morales ordenó](#) a su gobierno impedir su regreso a Guatemala.

Aunque la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente no impedir el reingreso de Velásquez, el colombiano ha evitado intentar regresar a Guatemala y el Gobierno ha insistido en que si eso sucede no lo dejará pasar.

En diciembre, el Ministerio de Relaciones y Migración cerraron la pinza en torno a CICIG al anunciar que no renovarían las visas de 11 investigadores, entre ellos los que habían investigado al presidente y a dos de sus familiares. La decisión deja abierta la posibilidad de la expulsión de los investigadores del país.

La comisión y la fiscalía han seguido abriendo casos contra funcionarios locales, pero la lucha contra la corrupción parece haber perdido la fuerza que había ganado desde 2015, cuando investigaciones de la CICIG y el MP desencadenaron eventos judiciales y políticos que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, hoy preso y en espera de juicio por corrupción.

Honduras: Vaso medio lleno

Quizá el evento que mejor dejó al descubierto la reticencia de las élites políticas hondureñas a someterse a investigaciones fue la renuncia, en febrero, del peruano Juan Jiménez Mayor, quien hasta entonces había dirigido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Jiménez Mayor [renunció en protesta](#) por los intentos del gobierno de Juan Orlando Hernández de bloquear el trabajo del organismo internacional, creado en 2016 bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña.

En la carta de renuncia que presentó al secretario general de OEA, Jiménez Mayor explicaba cómo el Partido Nacional de Hernández, a través de sus diputados en el Legislativo y de jueces en el Judicial, y otros agentes paraestatales se embarcaron en una campaña institucional para bloquear reformas legales y procesos criminales emprendidos por la MACCIH y el Ministerio Público.

El peruano denunció, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno habían estado blandiendo el argumento de la soberanía nacional para intentar minimizar el impacto de la Misión. Jiménez Mayor también se quejó del poco apoyo recibido desde la sede central de la OEA y de su secretario general.

En junio, la MACCIH, ya con Jiménez Mayor fuera, y el Ministerio Público [presentaron el caso Pandora](#), una acusación colectiva contra 38 personas, funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, acusados de desviar unos U\$12 millones del erario. El financiamiento de la campaña del presidente Hernández es uno de los asuntos mencionados en Pandora.

En una primera reacción, Hernández pareció apoyar la investigación, pero de forma condicionada: “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos buscar”.

Para finales de año, según confirmó InSight Crime en Tegucigalpa, buena parte del caso Pandora seguía estancado en trámites judiciales.

Los argumentos de la presunción de inocencia y el de la soberanía se convirtieron, en Honduras como ha ocurrido en Guatemala, en dos de los principales argumentos de las élites para oponerse a esfuerzos supranacionales antiimpunidad como la MACCIH y la CICIG.

No parece casualidad, por ejemplo, que Hernández haya sido el único presidente que apoyó las actuaciones de su homólogo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde el guatemalteco denunció a la CICIG por “terrorismo judicial” y lesiones a la soberanía, entre otras cosas.

El Salvador: condenas individuales pero esquemas intactos

También hay buenas noticias: el año [dejó la condena](#) a diez años de prisión del expresidente Antonio Saca por corrupción y soborno. Las autoridades condenaron a Saca por apropiarse de unos U\$300 millones de fondos públicos durante su presidencia (2004-2009). Y, tras una investigación de dos años, pactó con el exmandatario una confesión que dejó al descubierto redes de corrupción que implican a los gobiernos del antecesor y sucesor de Saca.

No todo es positivo, sin embargo. A pesar de ser la primera condena en firme a un expresidente en el país, la fiscalía optó por no buscar, en juicio, la condena de 25 años que le permitía la ley. Más allá del caso judicial, la confesión de Saca deja claro que se mantienen intactos los esquemas de corrupción que [han permitido a los exmandatarios](#) salvadoreños apropiarse de millones de dólares a través de la llamada partida secreta de la presidencia.

Un ejemplo de esto es la propia investigación contra Saca. Esa, así como otra abierta contra Mauricio Funes, su sucesor al frente del Ejecutivo, empezó gracias a descubrimientos hechos por la Sección de Probidad, una oficina de la Corte Suprema de Justicia dedicada a examinar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Entre 2014 y 2015, Probidad abrió docenas de expedientes a expresidentes, ministros y diputados.

Los expedientes de Probidad pudieron convertirse en investigaciones criminales gracias al empuje de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte, que terminó funciones en julio de este año. Las señales enviadas por la nueva Corte, elegida en noviembre, no son buenas: una de sus primeras decisiones fue que las investigaciones sobre casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se harán a puerta cerrada.

Un triángulo que sigue en ebullición

Quien pose la mirada sobre el Triángulo Norte de Centroamérica a finales 2018 se llevará una sensación confusa. A pesar de las arremetidas de sus élites políticas y

económicas, la agenda anticorrupción sigue presente en algunas oficinas estatales, sobre todo en los ministerios públicos y fiscalías, y en porciones importantes de la sociedad civil y dos entes internacionales de justicia que mantienen un respaldo internacional importante.

Así se movió el dinero de CAPRES

La versión fiscal plantea que el dinero pasó de las cuentas del Estado hacia 14 cuentas privadas a nombre de 3 exfuncionarios. Luego, el dinero pasó a sociedades vinculadas a Saca.

insightcrime.org



Pero también es innegable que con la arremetida de las élites del Triángulo Norte a los esfuerzos anticorrupción, la impunidad ha vuelto a ganar terreno. Y con ella los viejos males de la región, sobre todo la fragilidad del Estado, han vuelto a quedar a la vista.

Parece claro que el objetivo principal de esas élites es mantener el control necesario sobre las instituciones públicas para evitar investigaciones y persecuciones penales, aunque al final esto signifique desviar recursos destinados al combate contra el crimen para utilizarlos con fines políticos, como en Guatemala; dosificar los esfuerzos anticorrupción, como en Honduras, o, incluso, establecer pactos políticos entre partidos contrarios, como en El Salvador.

Imagen destacada: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se dirige a la nación
AP Photo/Oliver de Roos

4

Migración venezolana, un nuevo filón para el crimen organizado

Escrito por Ronna Rísquez y Josefina Salomón



En el río revuelto que fue el año 2018 hubo una constante: la huida de los venezolanos de su país. La migración dejó a miles de personas sin casa, sin dinero y listas para la explotación de los grupos del crimen organizado.

Mariana es un ejemplo. A ella le tomó medio día cruzar por tierra la frontera entre Venezuela y Colombia. No necesitó documentos de identidad, ni pasaporte. Tampoco tuvo que atravesar ríos caudalosos, ni lidiar con funcionarios de puestos migratorios. Solamente pagó poco más de 20.000 bolívares y 10.000 pesos colombianos (unos US\$34 en mayo de 2018), todos sus ahorros, para ocupar uno de los cinco puestos en el vehículo tipo sedan que un amigo utiliza para transportar venezolanos a Colombia por Paraguachón, en el estado Zulia.

El monto, que parece simbólico, alimenta una rudimentaria estructura de **tráfico de migrantes** que opera en La Guajira. La organización es controlada por indígenas de la etnia Wayúu y es responsable de ingresar a miles de migrantes venezolanos ilegalmente a Colombia. Al menos 40 integrantes de la familia de Mariana, una manicurista de Maracaibo, que ahora viven en Medellín, usaron la misma red para salir de Venezuela.

El boom de la migración forzada de venezolanos lleva más de dos años y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que unos **tres millones de personas** salieron del país en ese lapso de tiempo. La mayoría se dirige a Colombia y Brasil, los vecinos más próximos, pero otros van a Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, México, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.

Migrantes víctimas del crimen organizado

El éxodo forzado de venezolanos ha sido capitalizado y aprovechado por los grupos de crimen organizado, que han convertido a los migrantes en víctimas y han hecho de la migración un negocio

insightcrime.org



El masivo y descontrolado éxodo de venezolanos ha estimulado el surgimiento de innumerables economías criminales y negocios ilícitos. Los migrantes son la “mercancía” que alimenta una **industria criminal** que viene creciendo exponencialmente, y que pudiera replicar la nefasta y peligrosa **experiencia de coyotes** que opera entre Centroamérica, México y Estados Unidos.

En Venezuela aún no existen cifras, ni datos que permitan estimar la cantidad de emigrantes que han alimentado las redes de tráfico y trata de personas, tampoco se sabe cuántos han sido reclutados por las organizaciones criminales que operan en Colombia, empujados por la desesperación de huir de una de las [peores crisis](#) sufridas por un país de la región en las últimas décadas.

En 2018 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó su primer [estudio](#) sobre tráfico de migrantes y se calcula que al menos 2,5 millones de migrantes fueron víctimas de redes de tráfico de personas en el mundo en 2016, generando ingresos de aproximadamente de US\$7.000 millones a estas organizaciones criminales.

En el caso de Venezuela el negocio de la migración ha echado raíces a ambos lados de la frontera. La primera estructura criminal que deben sortear los ciudadanos para salir del país está dentro de las propias instituciones del Estado. Funcionarios corruptos operan junto a intermediarios para sobornar y extorsionar a las personas que necesitan obtener un pasaporte, una carta de antecedentes policiales o la certificación de un título universitario, como lo [reportó](#) InSight Crime. Las exorbitantes tarifas en dólares para estos servicios son ofrecidas por whatsapp.

Si cruzan por tierra hay peligros. El territorio que comparten Colombia y Venezuela en [La Guajira](#), por ejemplo, es controlado por “los guajiros”, como se conoce a los indígenas de esa región, quienes imponen tarifas para autorizar la circulación de vehículos que transportan migrantes al lado colombiano. Tienen hasta 10 puntos de control en cada una de las más de [200 trochas](#) (caminos improvisados ilegales que conectan a ambos países), y disponen de una flota de vehículos registrados en su estructura. Para poder transitar por estas vías los pagos se hacen en cada punto de control y varían permanentemente.

Cuando un migrante o un transportista independiente intentan burlar este esquema de traslados se exponen a robos, maltratos, abusos sexuales y pone su vida en riesgo. También en la frontera con Brasil se comienzan a reportar casos de tráfico de migrantes, mediante organizaciones criminales que lideran indistintamente brasileños y venezolanos.

*“Apenas pisan territorio colombiano las venezolanas tienen la opción de vender su cabello hasta por **100.000 pesos** (unos US\$30)”*

Si van por mar hay otros peligros y otros costos. En las costas de Venezuela con Curazao y Aruba, y con Trinidad y Tobago se han identificado otras modalidades de tráfico de personas, como el uso de pequeños botes pesqueros -no aptos para estos viajes- para transportar ilegalmente a venezolanos. El [costo de la peligrosa travesía](#) es de US\$350 (un poco más de lo que costaría un boleto aéreo para el mismo destino). En la embarcación suben hasta 20 personas. No hay detalles acerca de las organizaciones y forma en que operan estos grupos, pero los frecuentes naufragios y [capturas](#) de los denominados “[balseros venezolanos](#)” indican que podría tratarse de una industria en crecimiento.

Esclavos del hambre

El hambre y las dificultades para acceder a los servicios de salud y los medicamentos han sido el motor que ha impulsado la acelerada y masiva migración de venezolanos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017, 87 por ciento de los venezolanos se encuentran en [condición de pobreza](#). Esta situación coloca a los emigrantes en una condición de vulnerabilidad que es [aprovechada](#) por las organizaciones criminales.

Muchos venezolanos son víctimas de esclavitud moderna y sus diversas manifestaciones, como la explotación sexual y laboral. Un [informe](#) Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Esclavitud, publicado por la ONG venezolana Paz Activa a comienzos de 2018, registró 198.800 víctimas de tráfico de personas desde Venezuela hasta 2017, y alerta que podrían llegar a 600.000 en 2019.

Venezuela, es junto a Belice y Haití, uno de los tres países de América Latina [señalados](#) por Estados Unidos de no hacer ningún esfuerzo para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas. Autoridades de Colombia [aseguran](#) que la trata de personas ha aumentado con la migración venezolana, como [reportó](#) InSight Crime.

En lo que va de año decenas de [redes de trata de personas](#), [explotación sexual](#) y esclavitud laboral de migrantes venezolanos han sido desmanteladas en [Colombia](#), [México](#), [Panamá](#), [República Dominicana](#), [Perú](#) y distintos países de [Europa](#).

En Bogotá 75 por ciento de las [víctimas de trata](#) reportadas son venezolanas. En localidades como Cartagena, Barranquilla y Quindío se han [desmantelado](#) pequeñas redes de esclavitud sexual y laboral. Las autoridades calculan que en Cúcuta hay más de 2.000 prostitutas venezolanas, tantas que tan solo cobran 10.000 pesos (unos US\$3,5) por su servicio.

"Las autoridades calculan que en Cúcuta hay más de 2.000 prostitutas venezolanas, tantas que tan solo cobran 10.000 pesos (unos US\$3,5) por su servicio"

Grupos criminales que operan en Colombia también se están aprovechando del hambre de los venezolanos. Autoridades del departamento Norte de Santander aseguraron a InSight Crime que actualmente todos los grupos armados están [reclutando](#) a venezolanos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos y Los Urabeños los [utilizan](#) para diversas funciones. En su último [informe](#) la Fundación Redes asegura que actualmente 60 por ciento de los integrantes de estos grupos son venezolanos.

Además, InSight Crime conoció que los venezolanos han desplazado a los raspachines —personas que se dedican a recolección de hojas de coca para sobrevivir— porque cobran menos sueldo.

“La mayoría de las personas que son captadas por estos grupos criminales son jóvenes desesperados por conseguir ingresos para ayudar a sus familias en Venezuela”, afirmó David Smolansky, exalcalde de El Hatillo viviendo en exilio, que coordina un grupo de trabajo sobre migrantes venezolanos creado este año por la Organización de Estados Americanos (OEA).

De hecho, los pagos van desde US\$100 hasta US\$300 al mes, un ingreso que sería casi imposible de recibir en su país. Pero los peligros también aumentan. En junio cuatro venezolanos (entre ellos dos mujeres) murieron durante un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de disidentes de las FARC en Arauca.

Economías informales, economías criminales

En Cúcuta, el punto más caliente de la amplia frontera que comparten Colombia y Venezuela, por donde transitan unos 40.000 venezolanos diariamente, el río de migrantes cargando maletas y paquetes sobre los hombros desemboca en una prolífica actividad comercial informal, donde todo, desde celulares, canaimitas (computadoras portátiles que repartía el gobierno venezolano en las escuelas) hasta cabello puede comprarse, o venderse.

Apenas pisan territorio colombiano las venezolanas tienen la opción de vender su cabello hasta por 100.000 pesos (unos US\$30), lo que en Venezuela se traduce en cinco salarios mínimos y brinda la posibilidad alimentar a una familia de 3 personas durante un mes. El cabello es utilizado para hacer extensiones de pelo natural que son ofrecidas en internet hasta por US\$200, mientras que las computadoras canaimitas son usadas en centros de apuestas y ventas de lotería.

Este pasaje es solo el abreboca de lo que se perfila como un importante corredor del crimen organizado asociado a la migración. Fuentes de InSight Crime aseguran que en esa frontera existe una estructura de prostitución, que se encarga de captar a mujeres jóvenes y niños desde el momento que pasan el puente Simón Bolívar. Son ubicados en vehículos de carga y trasladados a distitos departamentos de Colombia, e incluso a Panamá.

"Al contrario, cuando las fronteras se cierran, las personas migrantes no hacen más que tomar rutas más peligrosas"

Aunque esta versión no pudo ser confirmada en el trabajo de campo, se conoció que en diversas regiones de Colombia es notoria la presencia de una gran cantidad de trabajadoras sexuales de nacionalidad venezolana. También en localidades turísticas, como Cartagena y Santa Marta se han denunciado casos de explotación sexual de niños venezolanos.

Fronteras cerradas, crimen abierto

La situación generada por la migración venezolana ha comenzado a tener gran impacto en la región, donde en 2018 se realizaron al menos dos cumbres de gobiernos de América Latina en busca de una solución. Además se suma a la ya complicada situación migratoria que afecta a Centroamérica, México y Estados Unidos.

Sin embargo, mandatarios a lo largo y ancho del continente parecen no poder encontrar una respuesta efectiva a la crisis de migración. Al contrario, la reacción inmediata de muchos de ellos ha sido cerrar las fronteras, como forma de disuadir el aumento de flujos migratorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de quienes han abogado más fuertemente por esta alternativa, proponiendo diversas **estrategias** para, efectivamente, cerrar la frontera con México.

Aunque la ecuación plantea que al haber menos posibilidad de entrar a un país, habrá menos migración irregular es, simplemente, errónea.

Al contrario, cuando las fronteras se cierran, las personas migrantes no hacen más que tomar **rutras más peligrosas**, que usualmente están controladas por el crimen organizado, gracias, entre otros, a cadenas de corrupción y colusión con las autoridades y fuerzas de seguridad locales.

En México, por ejemplo, **los migrantes** ya están tomando rutas de tránsito más peligrosas. En esta situación, los grupos de crimen organizado saben que pueden cobrar tasas más altas por sus servicios, o por sus extorsiones. En el caso de Venezuela, el tráfico de migrantes aún no es un negocio tan redituable pues las restricciones para el ingreso de los venezolanos son menores, en la mayoría de los casos solo requieren de un documento de identidad vigente.

De hecho, la migración **no está disminuyendo**. Además, las **razones** por las que personas de centroamérica, Venezuela y otros países en la región migran o solicitan asilo, particularmente las altísimas tasas de **homicidios** a causa del control que ejercen las pandillas o grupos criminales en sus países, no han cambiado y sus gobiernos parecen no tener la capacidad, o voluntad política, para detener su continua expansión.

Tampoco existen elementos que indiquen una posible mejora de la crisis humanitaria en Venezuela, pues según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2018 podría cerrar con una **inflación** de 1.000.000 por ciento y el Producto Interno Bruto (PIB) se habrá reducido en 18 por ciento antes de terminar el año.

El aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo genera un mayor mercado para los grupos que se benefician de él y la falta de capacidad o voluntad política de las autoridades locales y nacionales en las zonas más afectadas de romper la corrupción y colusión que permiten que los grupos funcionen.

Estos dos fenómenos, combinados, hacen que resulte poco probable que la situación mejore a futuro. Al contrario, es probable que el hampa vea en este mercado ilegal, una creciente oportunidad de ganancias.

Imagen destacada: El venezolano Omar Mujica, a la derecha, se dirige a Lima por el arcén de la carretera Panamericana con otros migrantes venezolanos, después de cruzar la frontera de Ecuador hacia Perú.

AP Photo/Martín Mejía

5

América languidece, mientras los opioides y la cocaína florecen

Escrito por Deborah Bonello, Ángela Olaya y Seth Robbins



Si bien las organizaciones criminales tradicionales han expandido sus portafolios en los últimos años, el narcotráfico sigue siendo la fuente más importante de ingresos para los grupos de la región. Y gracias al incremento en el consumo de opioides y a los niveles récord de producción de cocaína, los criminales están cosechando grandes ganancias y reacomodándose a los nuevos tiempos.

Los principales productores de opio en Latinoamérica continúan siendo México y Colombia, y Guatemala en menor medida. La epidemia de opiáceos en Estados Unidos ha representado un empujón para el crimen organizado al sur de la frontera con Estados Unidos, y un nuevo producto --el fentanilo -- ha ingresado a los portafolios de algunas de las redes criminales más prominentes.

México es actualmente el principal proveedor de heroína hacia Estados Unidos, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), que afirma que 90 por ciento de la heroína encontrada en Estados Unidos proviene de México, según lo indicó la agencia tras ser consultada por InSight Crime. Y las autoridades de ambos países continúan reportando el aumento de la producción en México.

Según la DEA, la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de amapola en México se ha disparado en los últimos años. El organismo señala que el cultivo de amapola alcanzó un **récord máximo de 44.100 hectáreas** en 2017, en comparación con las **32.000 que se registraron en 2016**. La producción estimada de heroína ascendió a 111 toneladas, un aumento de más del 300 por ciento con respecto a la cantidad estimada en 2013 (que fue de 26 toneladas). Las cifras del gobierno mexicano en 2017 reportan 24.800 hectáreas de cultivos ilícitos de amapola entre julio de 2014 y junio de 2015, pero México aún no ha publicado las cifras para el período 2015-2016 en este sentido.

*"La epidemia de opiáceos en Estados Unidos **ha representado un empujón** para el crimen organizado al sur de la frontera con Estados Unidos"*

El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación son los principales productores de heroína, al igual que Guerreros Unidos y Los Rojos, dos grupos del estado de Guerrero que surgieron tras la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva (OBL). También prestan el servicio de transporte de heroína para lo cual cuentan con socios como el Cartel de Juárez y el Cartel del Golfo para el transporte por el centro y el este de la frontera México-Estados Unidos, en lugar del corredor del suroeste, donde se trafica la mayor parte de la heroína.

Los otros productores regionales de amapola se quedan cortos frente a México. Se estima que en Colombia había 1.000 hectáreas de cultivos de amapola en 2015 (suficientes para producir cerca de tres toneladas de heroína pura), según cifras del gobierno de Estados Unidos incluidas en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas de 2017 (**2017 National Drug Threat Assessment**). El papel de Guatemala es difícil de evaluar, pero es el menos significativo de los productores. Las cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que su participación en la producción de **amapola disminuyó** entre 2014 y 2015 (con 640 y 260 hectáreas, respectivamente) pero que volvió a aumentar en 2016, llegando a 310 hectáreas.

La demanda de Estados Unidos es la principal razón para el aumento de la producción en México. Los adictos a los analgésicos farmacéuticos recetados se han estado pasando a la heroína mexicana y al fentanilo, una droga sintética más letal. Las muertes por sobredosis de heroína aumentaron ligeramente en 2017, según números de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de Estados Unidos, **analizado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas** (National Institute on Drug Abuse). Sin embargo la cantidad de muertes por sobredosis de opioides sintéticos ha crecido a un ritmo asombroso -- de cerca de 10.000 en 2015 a casi 30.000 en 2017, un aumento de casi 200 por ciento. Los opioides sintéticos causan la muerte de muchos más estadounidenses que cualquier otro tipo de droga.

El fentanilo, que proviene principalmente de China, ya sea ya listo para consumir o mediante la importación de precursores químicos, está siendo transportado junto con otras drogas, como la heroína y la cocaína, por los grupos mexicanos, pero también es transportado solo (es decir, sin mezclarse con otros cargamentos) a través de la frontera. En algunos mercados pequeños de Estados Unidos, los cargamentos de solo fentanilo han suplantado a la heroína, según una investigación de InSight Crime y varios informes de prensa, pero en general la droga se mezcla con otras sustancias ilegales.

Incautaciones de Droga de la Oficina de Operaciones de Campo (al 31 de agosto de 2018)

insightcrime.org

	AF2012	AF2013	AF2014	AF2015	AF2016	AF2017	AF2018*
 Cocaína	45.260	39.075	41.312	38.145	52.803	62.331	47.945
 Heroína	3.780	3.990	4.314	5.530	4.224	3.925	4.813
 Marihuana	522.614	469.995	437.950	602.795	515.381	361.564	283.084
 Metanfetamina	14.131	20.739	23.234	29.001	37.703	50.569	67.292
 Fentanilo	N/A	N/A	N/A	N/A	440	1.196	2.135*

* Las estadísticas de fentanilo que se muestran aquí son hasta el 31 de julio

Nota: Las medidas están dadas en libras (lb)

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Año Fiscal (AF) 2018

No se sabe qué proporción del fentanilo ilegal (existe una presentación legal, producida por compañías farmacéuticas) consumido en Estados Unidos proviene de México. Hay un flujo constante de fentanilo muy puro que llega a los consumidores de Estados Unidos, quienes lo compran en la web oscura o lo reciben en pequeñas cantidades provenientes de China por correo y servicios de mensajería.

Las incautaciones de fentanilo en México han aumentado en los últimos años, según datos de documentos obtenidos por InSight Crime tras una solicitud de libertad de información. Y para grupos como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación —que cuentan con redes y cadenas de suministro en China para su negocio de metanfetamina— esto parece una tarea adicional obvia.

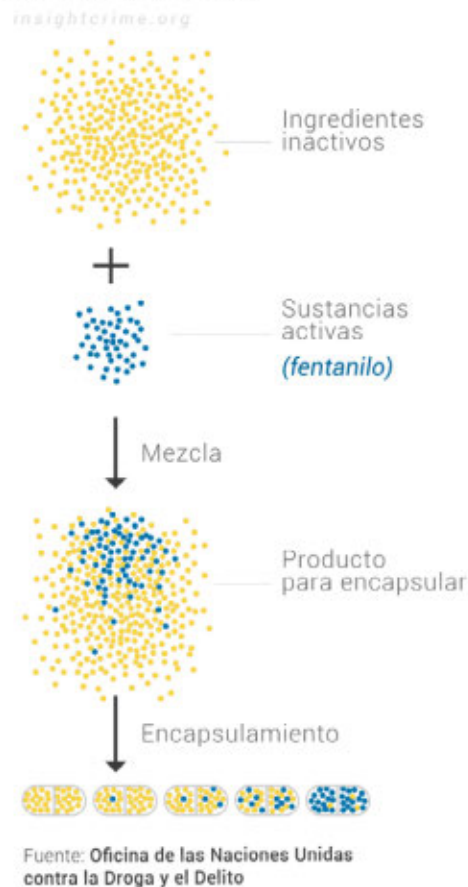
Un análisis de la DEA sobre la rentabilidad del fentanilo indica que un kilogramo de heroína les produce a los carteles alrededor de US\$80.000, mientras que un kilogramo de fentanilo con 99 por ciento de pureza les genera entre US\$1,2 millones y US\$1,9 millones. (Es importante señalar que la mayor parte del fentanilo proveniente de México tiene una pureza promedio del siete por ciento, mientras que el fentanilo traído de China directamente por correo tiene una pureza de más de 90 por ciento).

El mercado de fentanilo también puede estar impactando el comercio de heroína. Algunos informes no oficiales indican que ha habido una disminución en el precio del kilo de pasta de opio en las montañas mexicanas, que ha pasado de unos 18.000 pesos mexicanos (US\$900) a cerca de 8.000 pesos (US\$400), según analistas entrevistados y algunos [informes de prensa](#).

El fentanilo no es todavía un mercado grande para los grupos criminales mexicanos. Pero esta situación podría cambiar si la demanda y el consumo en Estados Unidos continúan aumentando. Aún más, los grupos mexicanos ya parecen estarse ajustando a la demanda de los consumidores en este floreciente mercado. A finales de 2018, la

mayor parte de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México iban combinadas con píldoras de prescripción falsificadas.

Dosis variable de fentanilo en cápsulas manufacturadas clandestinamente



En Colombia, por otra parte, la cantidad de tierra utilizada para el cultivo de coca ha alcanzado niveles históricos, lo que les permite a los traficantes de cocaína penetrar en nuevos mercados, como Asia y África, mientras continúan satisfaciendo la demanda en Estados Unidos y Europa.

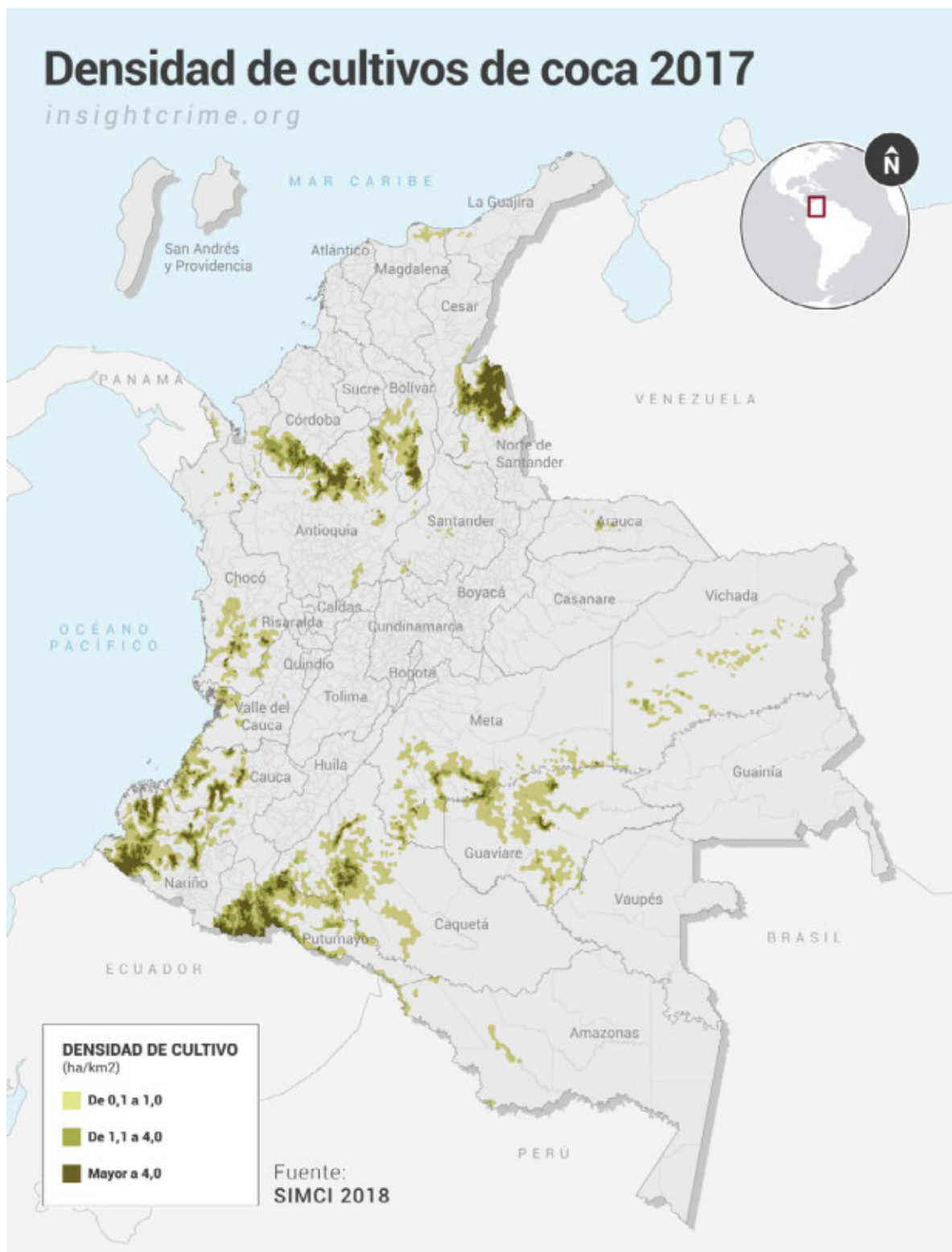
El cultivo de coca **alcanzó un récord de 209.000** hectáreas en 2017, un aumento de 11 por ciento con respecto al récord del año anterior, que fue de 188.000 hectáreas, según datos de la DEA. Además, los agentes de los organismos de seguridad estiman que la **producción de cocaína pura** en Colombia aumentó 19 por ciento entre 2016 y 2017, pasando de 772 toneladas a 921.

Esta tendencia va en sentido contrario a lo que ocurrió en la primera parte de la década, cuando la cantidad de tierra dedicada al cultivo de coca en Colombia disminuyó, obligando a los grupos criminales a recurrir a la compra de pasta de coca en Perú, que había superado a Colombia y se ubicaba como primer país cultivador de coca.

En 2012, la coca en Colombia **había bajado** a 48.000 acres, un cuarto de la cantidad actual, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Pero comenzó a aumentar de nuevo en 2013, y desde entonces ha crecido cada año. Colombia aporta actualmente 70 por ciento de la tierra utilizada para la coca ilegal en todo el mundo, **según el más reciente informe** de ONUDD.

Este aumento obedece a dos razones: el fin de las fumigaciones aéreas ha obstaculizado la erradicación de la coca y, como efecto secundario involuntario del proceso de paz en curso con el grupo guerrillero más grande de Colombia, se han generado nuevas posibilidades para el auge del cultivo de coca.

Cuando comenzaron las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2013, la guerrilla controlaba más de 60 por ciento de los cultivos de coca en el país. Al darse cuenta de que el proceso de paz avanzaría, los guerrilleros aumentaron la producción de cocaína, pues veían una última oportunidad de generar tanto dinero como fuera posible antes de convertirse en un ente político legal. Según **investigaciones** de InSight Crime, convencieron a los agricultores de las regiones cocaleras de que dichos cultivos les darían mayores ventajas al momento de negociar la entrega de recursos del gobierno. Las plantas de coca que se cultivaron en ese momento ya habrán madurado en los últimos dos o tres años.



Además, el gobierno colombiano detuvo en 2015 las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca, debido a crecientes evidencias que demostraban que los productos químicos de glifosato eran perjudiciales para la salud humana. El fin de las fumigaciones significó menos riesgo para los cultivadores de coca, y los grupos criminales aprovecharon la situación. En 2012 fueron destruidas 100.000 hectáreas mediante fumigación aérea, y otras 30.000 fueron erradicadas manualmente, según el informe de la ONUDD de 2013. En 2017, solamente **se destruyeron** 52.000 hectáreas de coca en tierra.

El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que quiere **volver a instaurar** las fumigaciones aéreas utilizando químicos diferentes y apuntando a los sembrados con más precisión mediante el uso de drones. Al mismo tiempo, el programa de sustitución de cultivos de Colombia, que se implementó después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, **se ha visto afectado** por diversos factores, como limitaciones financieras, dificultad para llegar a las comunidades rurales donde no existe suficiente seguridad, y desconfianza de los agricultores locales, quienes afirman que aún no han percibido los beneficios reales.

Los soldados que erradican los cultivos de coca se han topado con la resistencia de las comunidades, como lo demuestra la investigación de campo de InSight Crime. En 2018, las confrontaciones entre los cultivadores y el gobierno **causaron muertes** en Tumaco, ciudad portuaria ubicada en el departamento de Nariño, al suroeste del país, donde actualmente se produce una gran parte de la coca del país. En la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, durante una protesta los manifestantes **instalaron barricadas** en las carreteras y obligaron a las autoridades a suspender las labores de erradicación, según un informe de El Tiempo.

El desarme y la desmovilización de las FARC también han dejado un vacío de poder en las regiones cocaleras. Esto ha provocado un aumento de la violencia. Los miembros disidentes del grupo, y las dos guerrillas que quedan en el país -- el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que habían sido actores menores en el comercio de cocaína -- han intentado tomar el control de estas áreas. Y ambos grupos se han enfrentado con traficantes de estas regiones por el control de las rutas de tráfico.

Pero las sangrientas guerras de décadas anteriores, en las que los guerrilleros se enfrentaban con los grupos paramilitares y los carteles luchaban entre sí, parecen haber terminado. En el comercio de cocaína cooperan todo tipo de criminales: varias facciones guerrilleras, los ex paramilitares que conforman las BACRIM (acrónimo de “bandas criminales”) y traficantes tradicionales como Los Urabeños, la organización criminal más poderosa de Colombia.

Varios agentes de los organismos de seguridad de Estados Unidos han informado que Los Urabeños envían por barco regularmente varias toneladas de cocaína a Panamá y a otros países de Centroamérica. Pero la conformación de Los Urabeños es diferente a la estructura vertical de los antiguos carteles colombianos, y actúan más bien como una red de nodos independientes.

Los extravagantes capos a la manera de Pablo Escobar han desaparecido. Los traficantes que actualmente se ubican en el centro del comercio de cocaína en Colombia son en general **invisibles**; prefieren no tocar nunca un kilo de cocaína y pasar como empresarios comunes. Para ellos, la seguridad la concede el anonimato. Sin embargo, a pesar de sus recientes transfiguraciones, los traficantes colombianos no han perdido su poder, e incluso quizá se han expandido como organizaciones criminales transnacionales.

Colombia no es el único país suramericano que ha experimentado un aumento en la producción de cocaína. En Perú, la **cocaína pura aumentó** en 20 por ciento, alcanzando 491 toneladas, el nivel más alto registrado en 25 años, según la Oficina de la Política Nacional para Control de Drogas, de la Casa Blanca.

El auge de la cocaína y la facilidad con la que la droga pasa por varios países suramericanos también ha abierto nuevas rutas de tráfico. Por ejemplo, la cocaína que [atraviesa por Venezuela](#) es llevada más adelante a República Dominicana. El país caribeño ha sido [identificado](#) como una fuente primaria de la cocaína con destino a Europa.

En general, Europa se ha convertido cada vez más en un destino final de la cocaína, y las incautaciones en el continente aumentaron 11 por ciento en 2016, según el [Informe Mundial sobre las Drogas](#) publicado por ONUDD en 2018. Los principales aumentos se han registrado en Europa suroriental, donde la cantidad de cocaína incautada fue de más del triple en 2016, en comparación con el año anterior. Por primera vez, Bélgica incautó la mayor parte de la cocaína, seguida por España y Holanda.

La explosión en la producción de cocaína también les ha permitido a los traficantes penetrar aún más en los mercados emergentes de África y Asia. Aunque la cantidad de cocaína incautada allí es mínima en comparación con la de Europa o América, estas regiones experimentaron algunos de los aumentos más significativos en cuanto a las incautaciones. En África, las incautaciones de cocaína se duplicaron, y en los países del norte del continente hubo un incremento de seis veces entre 2015 y 2016. África ha servido cada vez más como punto de tránsito para la cocaína que sale de Brasil y llega a Europa.

Brasil es también el punto de partida de la cocaína con destino a Asia, donde la cantidad de cocaína incautada se triplicó. Gran parte de esa cocaína pasa por los Emiratos Árabes Unidos. China, incluido Hong Kong, aparece con frecuencia como el principal país de destino, seguida por Israel.

Pero Estados Unidos continúa siendo el destino de la mayor parte de la cocaína. Como ocurre con los opioides, las cifras en Estados Unidos son alarmantes. Según la DEA, las incautaciones de cocaína a nivel nacional han alcanzado sus niveles más altos desde por lo menos 2010, llegando a 34.000 kilogramos en 2017, 40 por ciento más en comparación con 2016. Cerca de 93 por ciento de las muestras de cocaína analizadas en Estados Unidos son de origen colombiano.

El auge de la cocaína también ha dado lugar al aumento en el consumo de drogas en Estados Unidos en los últimos tres años, según informes de [la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas de 2017](#). Lo más preocupante es que casi 15.000 personas murieron por sobredosis de cocaína en 2017, más del doble de las personas que murieron por esta misma razón en 2015.

Entre las drogas ilícitas, la cocaína es la más letal después de los opioides.

Imagen destacada: En las montañas de Madre del Sur, en México, un hombre frente a un sembrado de amapolas muertas tras la fumigación aérea con un herbicida

AP Photo/Dario López Mills

6

Los 'ganadores' del crimen en Latinoamérica

Escrito por Jeremy McDermott, Mimi Yagoub, Victoria Dittmar y Mike LaSusa



¿Cuáles son las principales estructuras criminales que más se fortalecieron en Latinoamérica en lo corrido de 2018? Tres grupos, en tres países distintos, han emprendido una agresiva expansión, tanto territorial como económica, y están preparados para dominar el panorama criminal de la región.

Aunque la tendencia general durante la última década en Latinoamérica ha sido la fragmentación de las estructuras criminales, estos tres grupos están cambiando el modelo y han cobrado una visibilidad eminente en su crecimiento en número e influencia territorial. Este crecimiento no ha sido solo nacional, sino también transnacional. Valga decir que estas son las estructuras criminales visibles a las que les hemos seguido la pista a lo largo de 2018. En un momento en que muchos criminales han optado por mantener un bajo perfil y sumir sus operaciones cada vez más en la clandestinidad, puede haber otros que se nos hayan escapado.

¿Esta agresión flagrante y su visibilidad son el secreto de su éxito? O ¿la atención que están atrayendo con sus acciones hará caer sobre ellos toda la furia de las autoridades nacionales e internacionales, y motivará su fragmentación y desaparición definitiva?

3. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Aunque el notorio cartel de Sinaloa monopolizó los titulares a lo largo de 2018, con el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cartel de Jalisco es el que ha estado creciendo, lento pero seguro, en México. Ahora controla más territorio que su rival de Sinaloa, y se impone en la lucrativa industria de las drogas sintéticas, a la par que sigue moviendo toneladas de cocaína al mes. El exagente de la DEA Mike Vigil declaró a Insight Crime que cree que el CJNG ya iguala al cartel de Sinaloa en términos de ganancias.

Con menos de una década en la escena criminal, el CJNG se erige como el grupo criminal con la presencia territorial más extendida, por lo menos en 22 estados mexicanos, un incremento en comparación con 2016, cuando se registraba en [apenas 14 estados](#). Una fuente de inteligencia mexicana en Guadalajara declaró a InSight Crime que el CJNG había amplificado su crecimiento mediante una política agresiva de reclutamiento de menores de edad, y de células criminales que quedaron sin líder en otras estructuras ilegales tras las muertes de sus cabecillas.

“Cuando el CJNG le gana la plaza a otro grupo, los que quedan se tienen que alinear”, dijo la fuente.

CJNG insightcrime.org

Cartel de Jalisco Nueva Generación

FUNDADA EN SEPTIEMBRE DE 2011

LIDER

NEMESIO OSEGUERA CERVANTES

Es uno de los capos más buscados por tráfico de drogas, participación en el crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego.

"EL MENCHO"

2018 fue el año en el que CJNG superó al Cártel de Sinaloa en el dominio del crimen organizado local que estos tenían por más de 20 años.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha ido en contra de la tendencia en México, perpetrando actos de violencia y ataques contra el Estado, expandiendo su presencia en 22 estados mexicanos y afianzando su control sobre la producción de drogas sintéticas y el tráfico de cocaína.

CRIMINAL WINNER 2018

Aun cuando otros importantes carteles de México, como Los Zetas, se fragmentan, Jalisco a pesar de recibir golpes, sigue intacto como federación criminal, con unos mandos y una dirección claros. Su comandante en jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ostenta el dudoso honor de [tener una recompensa de US\\$10 millones](#) sobre su cabeza, una de las más altas ofrecidas por el Tesoro de Estados Unidos.

El cartel de Jalisco ha demostrado ser notablemente ágil, rápido para aprovechar los cambios en el panorama criminal, como [la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez](#), alias “H2”, de la Organización Beltrán Leyva en Nayarit, y [la captura de Ignacio Rentería](#), alias “El Cenizo”, de los Caballeros Templarios en Michoacán. El CJNG usó esos sucesos para apresurarse a ocupar territorios en ambos estados.

Así mismo, el CJNG no ha tenido reparos para hacer uso de violencia extrema para enfrentar al estado. Durante la guerra por Nayarit, agentes de Jalisco incitaron tasas de homicidios récord y secuestraron y asesinaron a dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (conocida con el acrónimo de la SEIDO). Incluso [hicieron desfilar a los dos agentes](#) en un video que subieron a internet antes de matarlos.

Con el control de los puertos en ambas costas mexicanas, el único cartel que tiene una infraestructura de esa magnitud, el CJNG tiene extensas redes de exportaciones, que no solo van hacia Estados Unidos, donde según la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene [redes de distribución consolidadas](#) en Los Angeles, Nueva York y Atlanta, sino también hacia Europa y Asia. Y no solo es la salida de drogas de México, sino los precursores químicos que inundan el país para abastecer los laboratorios de drogas sintéticas del CJNG, incluyendo los de producción de fentanilo.

El CJNG tiene otra ventaja comercial, una alianza con Los Cuinis, que actúa como la [facción de lavado de dinero](#) del cartel.

Sin embargo, 2018 no ha estado exento de dificultades para el grupo. Ha enfrentado pugnas intestinas, como la formación de un grupo disidente, la Nueva Plaza, que le [disputa al CJNG su base de operaciones](#) en Guadalajara. También ha habido un alto número de detenciones de miembros del CJNG, incluyendo la esposa de El Mencho, [Rosalinda González Valencia](#), el 26 de mayo, en Guadalajara, por cargos de crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, pese a la creciente presencia e importancia del CJNG, la administración del ex-presidente Enrique Peña Nieto asestó [poquísimos golpes](#) al cartel, para gran frustración de Estados Unidos, que retiró la reserva sobre 15 expedientes contra el alto mando del cartel en octubre de 2018.

2. El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Como último grupo insurgente aún en armas en Colombia, el ELN ha aprovechado al máximo la desmovilización de sus poderosos primos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017, para convertirse en el grupo ilegal más poderoso del país, en términos de capacidad militar e influencia territorial.

El ELN ha tomado control del territorio que alguna vez perteneció a sus aliados de las FARC en zonas en las que cohabitaron los dos grupos, con la absorción de sus economías criminales y, en algunos casos, su mano de obra.

Entre las economías criminales que han estado recogiendo está el negocio de la droga, no solo la cocaína, sino también la marihuana y la heroína. Pese a su resistencia ideológica histórica al negocio de los narcóticos, el ELN se ha sumergido ahora en todos los eslabones del negocio de la droga, aprendiendo de las FARC y expandiendo su fuente de ingresos, que había ido en declive por muchos años.

“Si varias estructuras [del ELN] no hubieran recurrido al narcotráfico, habrían desaparecido”, señaló el experto en el ELN Luis Eduardo Celis, en un intercambio con InSight Crime.



Varias investigaciones han hallado que el ELN ha reforzado su participación en el negocio de la droga de varias formas en los dos últimos años: de la exportación de **cocaína y heroína**, a la posesión de “narco”submarinos semisumergibles para el transporte de droga (en especial el **primer submarino eléctrico** incautado en Colombia). Todo ello a pesar de una tajante declaración del alto comandante del ELN de no inmiscuirse en el tráfico de drogas:

“reiteramos la ... exigencia para que de ninguna manera el fenómeno contrarrevolucionario del narcotráfico, tenga cabida en la vida de nuestras estructuras”, declaró el comandante en jefe del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, en una alocución subida a internet.

En su calidad de mayor actor ilegal, las organizaciones narcotraficantes recurren al ELN para que les facilite su actividad y les preste los servicios de protección vitales que requieren para producir cocaína y la lleven a los puntos de partida para enviarlos a mercados internacionales. Es posible que esto siga contribuyendo al crecimiento del ELN en 2019.



Sin embargo, el ELN no se está expandiendo solo en Colombia. La vecina Venezuela, sumida en el colapso económico y la criminalidad extendida, se ha convertido en terreno fértil para la expansión del ELN. La investigación de InSight Crime ha seguido la pista a la presencia del ELN en 12 de los 24 estados de Venezuela, muchos de ellos lejos de la frontera con Colombia. Aunque la presencia del ELN en Venezuela

no es nueva, se había concentrado en tres estados fronterizos: Apure, Táchira y Zulia, ahora los insurgentes colombianos tienen influencia en todo el país y parecen estar prestando especial atención al estado de Bolívar, rico en oro, imponiendo el orden e “impuestos” a la minería informal que se extiende por todo ese estado.

Sin embargo, el ELN está dividido. Pese a tener un comando central, conocido como el COCE, hay una facción moderada, que ha estado liderando los [titubeantes diálogos de paz](#) con el gobierno, bajo la dirección de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”. Del otro lado, está la facción militar y más radical, que dirige la agresiva expansión. El jefe más importante de esta es Gustavo Anibal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, quien lleva mucho tiempo establecido en el estado venezolano de Apure y posiblemente está al frente de la expansión de los insurgentes en Venezuela. Esto no debería impedir el crecimiento continuado del grupo insurgente, pero sí torpedea al grupo en lo que respecta a construir algún tipo de acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Ninguna negociación real es posible con el grupo mientras crezca a esa velocidad. Y hay poca evidencia de que ese crecimiento esté disminuyendo, aun cuando el ELN aguanta cada vez más el peso de la ofensiva del ejército colombiano.

No cabe duda de que si el ELN se alía con los disidentes de las FARC, también en aumento, algo que ya parece estar sucediendo, los insurgentes lograrán alcance nacional y hasta transnacional en 2019.

1. El Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC)

La pandilla carcelaria más poderosa de Brasil estuvo ocupada en 2018. La organización aprovechó al máximo la total falta de voluntad política para enfrentarla. El débil, paralizado y al parecer corrupto gobierno del presidente Michel Temer gastó su limitado capital político simplemente en aferrarse al poder. A eso se sumó el restante interés político nacional dirigido a unas elecciones presidenciales que lanzaron al poder a Jair Bolsonaro, un extremista en temas de seguridad, el 1 de enero de 2019.

El PCC lleva varios años en expansión, pero en 2018 se reveló una presencia y cohesión mucho mayores que las que se habían registrado con anterioridad, con agresivos operativos en Paraguay y Bolivia, y tentáculos que llegan a Colombia, Argentina, Uruguay y Venezuela. La participación de la pandilla en el negocio internacional de la cocaína también revela una capacidad para obtener mayores ganancias y expandirse por fuera de Suramérica.

Uno de los detonadores de los ataques del PCC ha sido la guerra con la pandilla carcelaria más antigua de Brasil, el Comando Rojo (Comando Vermelho), que se inició en 2016 y llevó a que el [PCC desafiara](#) al Comando Rojo en todo el país.

Archivos [incautados por las autoridades](#) en 2018 arrojan luz sobre fuentes de ingresos, tácticas de lavado de dinero y aumento de reclutas del PCC. Los documentos indicaban que la renta anual del grupo puede llegar a los US\$200 millones. Según los documentos, los miembros del PCC pagan una cuota de afiliación hasta de 950 reales brasileños (US\$250) al mes, que se destinan principalmente al mantenimiento de los miembros del grupo en prisión.



La expansión del PCC en el exterior ha sido más evidente en Paraguay. La expansión en ese país, y la predisposición del grupo a actuar en abierto desafío ante cualquier respuesta paraguaya, se anunció con estilo cinematográfico en abril 2017 con un osado ataque a las oficinas principales de Prosegur, una firma de autos blindados en Ciudad del Este. Con precisión militar, 60 hombres armados volaron las puertas de una bóveda, con toda tranquilidad sacaron US\$11,7 millones, condujeron en una caravana de vehículos a prueba de balas hasta la frontera y fueron vistos por última vez en lanchas rápidas por el río Paraná, en dirección a Brasil.

Desde entonces, las raíces del PCC en Paraguay, principal país productor e marihuana de Suramérica y paraíso de contrabandistas, se han afianzado y propagado. Se cree que el PCC **domina ahora la ciudad paraguaya fronteriza** de Pedro Juan Caballero, donde ejerce un control total del negocio de la marihuana y la cocaína que pasan por esta ciudad.

*"Específicamente,
el motor del
crecimiento del PCC
son las prisiones"*

Todas las estructuras criminales de Brasil **quieren acceso** a la bonanza de la producción de cocaína en Colombia, no solo para abastecer el creciente **mercado interno**, sino también para hacerse a una tajada del negocio transnacional, que es más lucrativo. La presencia del PCC en la zona trifronteriza, entre Brasil, Colombia y Perú, otro país productor de cocaína, se ha intensificado en los últimos años, muchas

veces [acompañada de masacres](#) y violencia extrema. Bolivia no ha estado exento de una dinámica similar, aunque en 2018 fue el Comando Rojo, más que el PCC, [el que tuvo una presencia más obvia en ese país](#).

Venezuela, con la corrupción extendida y el descalabro económico, se ha convertido en fuente de armas para grupos criminales, y el PCC [ha buscado abastecerse](#) de armamento de grueso calibre allí.

Aunque algunos de los principales jefes del PCC han caído muertos, el grupo ha logrado mantener su dirección y control, aunque actúa más como una franquicia con una junta directiva que como una estructura integrada verticalmente. La junta directiva se conoce como la ‘Sintonia Geral Final’ (Sintonía General Final), y está conformada por unos ocho a diez miembros. Esta toma las decisiones más importantes sobre estrategia y dicta indicaciones generales para las actividades de los miembros del PCC.

Irónicamente la elección del presidente Bolsonaro puede ser un estímulo para el PCC, sin duda en términos de reclutas, pues se prevén más confrontaciones y arrestos de miembros, según la retórica de campaña.

“Específicamente, el motor del crecimiento del PCC son las prisiones”, comentó la experta en el PCC Camila Dias, de la Universidad Federal de ABC. “Las prisiones son los lugares donde el PCC ancla su base y crea su fuerza y sus bases sociales. Entre más se impulse la política de reclusión como respuesta a la violencia, más se fortalecerá y expandirá el PCC. Paradójicamente el estado termina actuando para proveer más miembros al PCC”.

Brasil tiene [la tercera mayor población carcelaria](#) del mundo, con más de 700.000 presos, y sigue de cerca a Estados Unidos y China, ambos con poblaciones totales mucho mayores. Y ese número parece destinado a crecer durante 2019.

Es la opinión de InSight Crime que el PCC pronto se convertirá en una de las estructuras criminales más importantes del continente americano y se codeará con los colombianos y los mexicanos. La expansión futura, especialmente en el ámbito transnacional, dependerá de cuánto se involucre el PCC en el negocio de la cocaína, aprovechando la posición de Brasil como uno de los principales puentes de la cocaína hacia Europa y más allá.

Márcio Christino, fiscal de São Paulo, [autor de dos libros sobre el PCC](#), compartió esa opinión.

“El PCC está en Brasil, Bolivia, Paraguay y está ingresando a Uruguay y Argentina. Van en esa dirección. Hay un vacío y ellos van a expandirse y expandirse. Y a dominar”.

Imagen destacada: Una bandera del ELN ondea en Roberto Payán, municipio del departamento de Nariño, en la costa Pacífica colombiana

InSight Crime

7

5 razones por las que el crimen organizado crecerá en Latinoamérica en 2019

Escrito por Jeremy McDermott



Es difícil ser optimista para 2019. Todas las tendencias actuales apuntan a un fortalecimiento del crimen organizado en toda Latinoamérica y el Caribe, pues los criminales se adaptan mucho más rápido que las autoridades a los cambios de condiciones y aprovechan las nuevas oportunidades.

He aquí los cinco motivos que nos hacen temer que el crimen organizado pueda crecer en poderío y sofisticación durante 2019 en América Latina:

1. Falta de respuesta integrada o transnacional al crimen organizado

El crimen organizado transnacional solo puede enfrentarse con éxito a escala transnacional. Pero en Latinoamérica hay cada vez menos cooperación bilateral, regional o internacional contra la rápida evolución de la dinámica criminal. El año 2019 ofrece aún menos posibilidades de una respuesta unificada.

Estados Unidos, para bien o para mal, ha sido históricamente el líder regional contra el crimen organizado, y ha usado su poder e influencia para diseñar y promover respuestas regionales. En el pasado, Washington había intentado controlar a los países latinoamericanos para pensar y afrontar las dinámicas criminales, en especial las que impactan directamente a Estados Unidos, a saber, el narcotráfico y la migración.

"Trump ha dividido a los gobiernos latinoamericanos en lugar de darles un espaldarazo para que adopten políticas comunes y de unidad frente a las crecientes amenazas criminales"

Sin embargo, la administración Trump ha echado por tierra la noción de "poder blando", la persuasión sutil y el alcance democrático y de derechos humanos que modelaron la política exterior reciente de Estados Unidos. Trump también ha logrado ofender a sus dos aliados regionales tradicionales en la lucha contra el crimen organizado, México (la [alusión a los infames "violadores"](#) es tan solo un ejemplo) y Colombia (a la que [amenazó con descertificar](#) en la guerra antinarcóticos).



Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
AP Photo/Susan Walsh

Aunque Trump se ha deshecho en pronunciamientos sobre la inmigración, con promesas de muros y tolerancia cero, el presidente no ha establecido [nuevas estrategias](#) para resolver el problema de la migración centroamericana en la raíz. De hecho, sus políticas aislacionistas bien pueden enviar a más migrantes a Estados Unidos, en especial por el lejano lugar que ocupa la región en su lista de prioridades.

Ha dividido a los gobiernos latinoamericanos en lugar de darles un espaldarazo para que adopten políticas comunes y de unidad frente a las crecientes amenazas criminales. Centroamérica, por ejemplo, ha recibido mensajes contradictorios de Washington. Se le ha pedido a la región que [contenga la migración hacia el norte](#). Pero uno de los motores subyacentes de la migración es el crimen organizado que, mediante la intimidación, la corrupción y la extorsión, obligan a la población a dejar sus hogares y buscar una vida mejor en otros lugares.

Aunque Estados Unidos le ha entregado a Centroamérica casi mil millones de dólares en ayuda desde 2008, por medio de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI), con el propósito de combatir el crimen y fortalecer las instituciones de gobierno, actualmente está atacando la lucha contra la corrupción, el principal facilitador del crimen organizado. Una muestra de esto es la [falta de compromiso de Estados Unidos](#) con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas. Esto ha enviado un mensaje claro a los líderes latinoamericanos: Mantenga contento al presidente Trump y podrá hacer lo que quiera, al menos en lo que tiene que ver con la corrupción rampante.



*El presidente de Guatemala Jimmy Morales habla por celular después de una conferencia de prensa
AP Photo/Luis Soto*

Esta tendencia seguramente empeorará en 2019, pues Trump ha perdido el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las luchas políticas internas en Washington pueden desplazar la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica mucho más abajo en la lista de prioridades estadounidenses.

A los organismos regionales no les va mejor. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) parece estar agonizando. Lo único que une a los países en este momento es Venezuela,

movidos por la oleada de refugiados que están ingresando a casi todos los países de la región. La Organización de Estados Americanos (OEA), notoriamente ineficaz en el desarrollo de la política regional, se ha concentrado en denunciar la caída de Venezuela en una dictadura, mientras que nuevas constelaciones, como el Grupo de Lima, que congregó a 17 países de la región, analiza el tema de una transición pacífica para devolver la democracia a Venezuela. Sin embargo, en el tema del crimen organizado transnacional la atención y la coordinación han caído al mínimo.

Las relaciones bilaterales muestran algunos ejemplos de cooperación, pero son aislados. Perú y Bolivia han estado trabajando conjuntamente para controlar el

puente aéreo de la cocaína entre ambos países, mientras que Colombia mantiene intercambios de inteligencia permanentes con Brasil y Ecuador. Sin embargo, fuentes tanto en Bogotá como en Caracas nos dicen que no hay diálogo entre Colombia y Venezuela, que podría ser una de las alianzas más relevantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Suramérica.

2. Respuestas repetitivas y cansadas de los gobiernos nacionales a las amenazas del crimen organizado

En el eje criminal de la región, México, Colombia y Brasil, vemos poco en materia de nuevas estrategias a los viejos problemas del crimen organizado, tampoco hay mucha innovación en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), azotado por la violencia. En lugar de ello, vemos variaciones de la misma respuesta militarizada y represiva de siempre, que han tenido poco impacto en la contención, sin mencionar la reducción de la actividad criminal en la última década. Sin duda, estas políticas han llevado a que Latinoamérica se convierta en la región más violenta del mundo.

El presidente Iván Duque en Colombia, elegido por la promesa de una política de seguridad endurecida no ha presentado nuevas orientaciones para contener el auge de la producción de cocaína y el aumento de los disidentes de la guerrilla. De hecho, su liderazgo ha sido tan débil que tras pocos meses en el poder, Colombia se ha sumido en el pesimismo.

El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, más conocido como “AMLO”, mencionó en su campaña algunas estrategias nuevas para combatir el crimen, incluyendo una especie de amnistía para delincuentes comunes y más rehabilitación de presos para minimizar la reincidencia. También habló de reducir el rol del ejército en la lucha contra el crimen organizado. Pero ya ha comenzado a echarse para atrás en muchas de estas promesas. En lugar de eso ahora se habla de la creación de una Guardia Nacional conformada por policía y ejército que operaría bajo la dirección del Ministerio de Defensa y asumiría la lucha contra el crimen organizado. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, creó un órgano similar, con la Gendarmería, que tuvo un efecto notablemente ínfimo. La propuesta formalizará un rol permanente del ejército en la seguridad interna de México. Además, su implementación será lenta y costosa, pues requerirá cambios en la constitución.

En Brasil, el recién posesionado Jair Bolsonaro, exoficial del ejército, que ha llenado su gabinete de generales, ha prometido un retorno al pasado.

Busca facilitar la posesión de armas con el fin de armar a los “buenos”. Quién va a definir quiénes son los buenos y quiénes los malos y así evitar que armas de fácil acceso pasen al mercado negro es algo que no se ha explicado.

La tasa récord de homicidios de 2018 en Brasil, con 175 homicidios diarios, parece lista para ser superada en 2019, con el mayor acceso a armas, unos organismos de seguridad con las riendas sueltas y ningún impedimento y la expansión de las bandas criminales.



Una partidaria del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posa para una foto con la maqueta de un rifle
AP Photo/Silvia Izquierdo

Venezuela alberga el régimen más criminalizado de la región. El país no solo ha ido cayendo en una dictadura, sino que además la cúpula del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyendo a [su esposa](#), parecen [inextricablemente ligados a la actividad](#) criminal. El éxodo provocado por el colapso de la economía y la represión está garantizando que los venezolanos que salen de su país estén [extremadamente vulnerables](#) a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado. Los venezolanos son considerados mano de obra prescindible, dispuestos a asumir mayores riesgos por una retribución mucho menor que otros latinoamericanos. Desde la cosecha de hojas de coca hasta el procesamiento de cocaína, el manejo de [las lanchas rápidas](#) que surcan el Caribe, hasta los asesinatos a sueldo, hay venezolanos en todo tipo de empresas criminales.

3. Corrupción de alto nivel

El número de presidentes latinoamericanos en ejercicio y retirados que tienen investigaciones abiertas o han sido sentenciados por corrupción es asombroso (vea la ilustración). Uno de los casos más extremos es Perú, donde sus [últimos cinco presidentes](#) están siendo investigados. Agregue vicepresidentes y ministros a esa lista y la cifra se eleva a centenares, lo que revela el carácter sistemático de la corrupción en toda la región.

Aunque Perú está a la cabeza de los presidentes vinculados a la corrupción, lo siguen de cerca Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y México, sin sacar de la lista a Haití y Panamá. Pocos países están libres de esta tendencia, salvo quizás Chile y Uruguay.

Presidentes latinoamericanos vinculados a la corrupción

insightcrime.org



1. Enrique Peña Nieto (México)
2. Vicente Fox (México)
3. Ricardo Martinelli (Panamá)
4. Otto Pérez Molina (Guatemala)
5. Alfonso Portillo (Guatemala)
6. Jimmy Morales (Guatemala)
7. Álvaro Colom (Guatemala)
8. Jorge Serrano (Guatemala)
9. Oscar Mejía (Guatemala)
10. Efraín Ríos Montt (Guatemala)
11. Alberto Fujimori (Perú)
12. Alejandro Toledo (Perú)
13. Ollanta Humala (Perú)
14. Pedro Pablo Kuczynski (Perú)
15. Alan García (Perú)

16. Michel Martelly (Haití)
17. Leonel Fernández (República Dominicana)
18. Rafael Callejas (Honduras)
19. Elías Antonio Saca (El Salvador)
20. Francisco Flores (El Salvador)
21. Mauricio Funes (El Salvador)
22. Álvaro Uribe (Colombia)
23. Juan Manuel Santos (Colombia)
24. Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)
25. Michel Temer (Brasil)
26. Federico Franco (Paraguay)
27. Mauricio Macri (Argentina)
28. Cristina Fernández (Argentina)
29. Carlos Menem (Argentina)
30. Néstor Carlos Kirchner (Argentina)

La furia ante la corrupción no solo ha motivado la destitución de varios presidentes, entre los que se destaca [Pedro Pablo Kuczynski](#) en Perú, sino que ha llevado a sangre nueva a la presidencia, como AMLO en México y Jair Bolsonaro en Brasil.

La lucha contra la corrupción fue la plataforma central de una exitosa campaña en Brasil.

“Los males y perjuicios de la corrupción afectan a la población de todas las formas”, tuiteó Bolsonaro en su campaña. “Eso es lo que queremos impedir”.

Sin embargo, el presidente Bolsonaro parece haber llenado su gabinete de [políticos vinculados con escándalos de corrupción](#), lo que deja interrogantes sobre si se dará algún cambio real.

Venezuela tiene uno de los gobiernos más corruptos del planeta, responsable de la criminalidad rampante y el colapso económico. En 2017, el presidente Nicolás Maduro frustró las protestas populares que clamaban por su destitución y en 2018 más de un millón de venezolanos optaron por dejar el país. Mientras su gobierno se mantenga en el poder, el colapso del Estado y la represión general parecen destinados a continuar.

4. Auge de las economías criminales

La producción de cocaína se encuentra en picos inéditos y Estados Unidos se encuentra en medio de [su crisis de drogas más mortífera](#) vista con [los opioides](#).

Para dar una idea de las ganancias criminales generadas por los narcóticos, las cifras de Naciones Unidas sitúan la producción anual de cocaína [en más de 1.400 toneladas](#) para Colombia y en más de 600 toneladas para Bolivia y Perú. Los precios promedio de la cocaína oscilan entre US\$2.000 y US\$3.000, en los países andinos de origen, para generar ganancias de unos US\$5.000 millones a los grupos criminales dedicados a la producción.

A precios al por mayor en Estados Unidos, esa cantidad de cocaína puede generar más de US\$50.000 millones. A precios europeos, la misma cantidad puede recoger más de US\$42.000 millones, más que todo el [producto interno bruto de Bolivia](#).

Eso sin contar las ganancias de la marihuana, la heroína y las drogas sintéticas, que en conjunto podrían competir con la renta generada por la cocaína.

Perolas drogas no salen todas de Latinoamérica. [El consumo interno](#) de estupefacientes exhibe un aumento, que da pie a nuevos retos de seguridad y al surgimiento de una nueva generación de estructuras criminales.

En 2012, Brasil se convirtió en el [segundo mayor mercado para la cocaína](#) y sus derivados en el mundo, después de Estados Unidos. El consumo de cocaína se está [incrementando en toda la región](#), actualmente en 0,95 por ciento de la población, aún a la zaga de Estados Unidos (1,9 por ciento) y de Europa Occidental (1,2 por ciento), pero la brecha se está cerrando.

El consumo de marihuana en Latinoamérica ha estado incrementándose en los últimos años, y las drogas sintéticas, relativamente desconocidas hace una década y anteriormente importadas, se **están produciendo ahora** en países como Colombia.

Otras economías también están en auge, como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando de personas y la trata, entre otras.

La minería es una fuente de ingresos enorme para el crimen organizado. Esta se centra mayormente en el oro, pero hay presencia de economías criminales menores en torno al cobre, el coltán, el estaño y el tungsteno.

La industria del oro genera **una renta criminal importante** en Suramérica, principalmente en Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana. Para dar una idea de la escala del negocio, solo en Colombia la minería de oro genera más de **US\$2 mil millones al año**. Solo un ejemplo de la creciente criminalización de esta actividad en 2018 puede observarse en Venezuela, donde en medio del colapso económico, el señuelo del oro creó un **arancel criminal para todos** con altos índices de violencia. Incluso ha atraído **actores criminales de Colombia** buscando aprovechar la bonanza.

La extorsión es difícil de medir. La naturaleza de la industria es tal que hay un pasmoso subregistro. Sin embargo, en 2018, realizamos un trabajo de campo para estudiar la extorsión en Centroamérica (centrada en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá) que revela los índices epidémicos en los países del Triángulo Norte que apuntala a **las temidas Maras**, las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. La extorsión sistemática también es común en muchos lugares de Colombia, México, Venezuela y Brasil, y está creciendo en Perú.

La trata y el contrabando de personas también crecen. En 2018, la mayoría de los medios prestó mayor atención a las “caravanas” de migrantes, mucho menores, que viajan de Centroamérica a Estados Unidos, pero Venezuela es el principal motor de esta tendencia. Unos **tres millones de venezolanos** han huido de su patria desde 2015.

5. Agilidad y más clandestinidad del crimen organizado transnacional

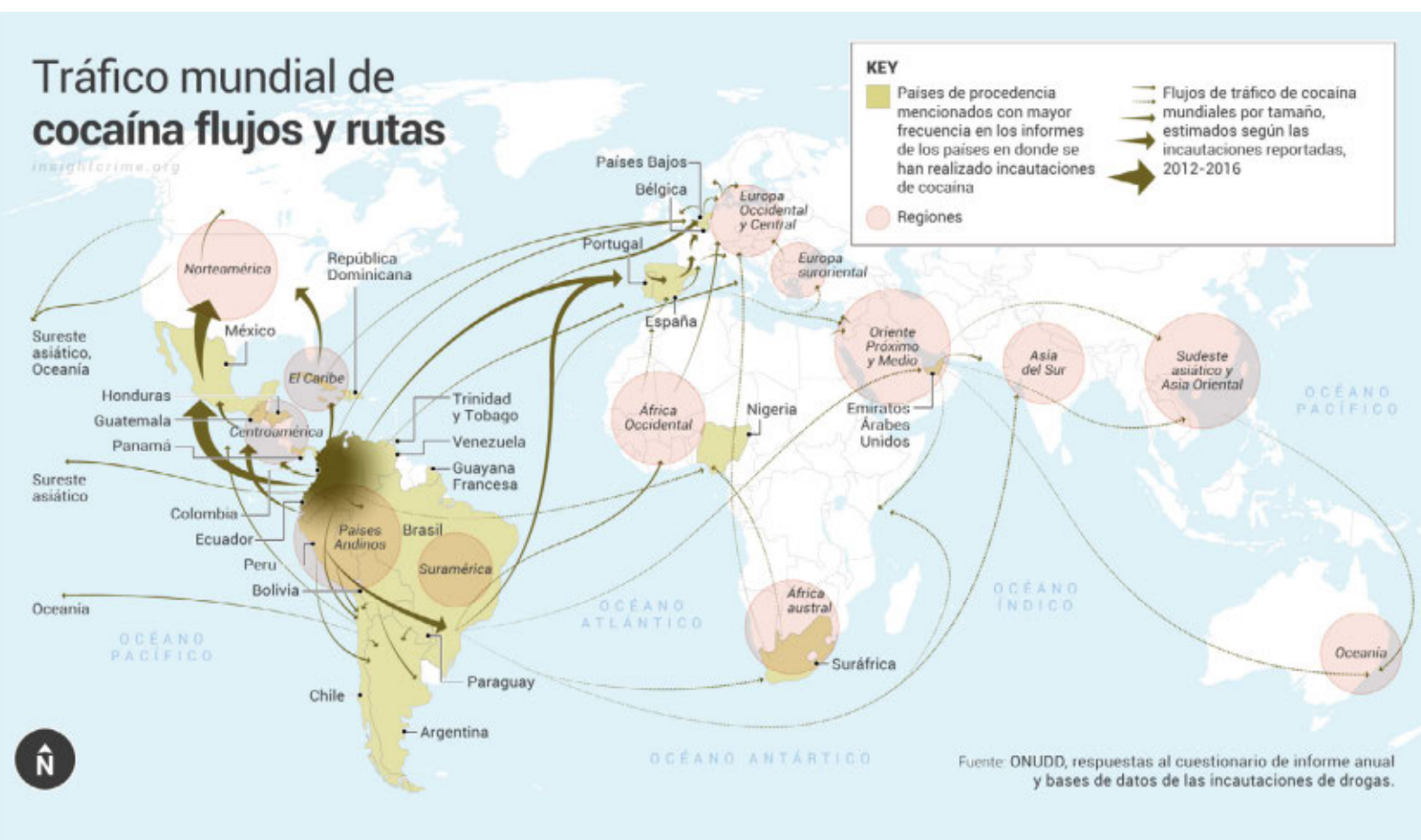
Mientras la respuesta del gobierno al crimen organizado está anquilosada y repetitiva, el crimen organizado transnacional es más ágil que nunca, apoyado en una ola de mayores ganancias de la droga, los minerales, el ecotráfico y el contrabando de personas. Estos son tiempos de bonanza para los criminales, y quizás con más margen de operación regional que en algún otro momento de los últimos 15 años.

Hemos perfilado tres estructuras criminales que se **han enfrascado en una agresiva expansión** en 2018, lideradas por el **Primer Comando de la Capital** (Primeiro Comando da Capital –PCC), seguido del **Ejército de Liberación Nacional** (ELN) de Colombia y el **Cartel Jalisco Nueva Generación** (CJNG), pero con el aumento de las ganancias criminales, también crecen las organizaciones criminales que se alimentan de ellas.

Muchas de las estructuras criminales en Latinoamérica son pandillas carcelarias, incluido el PCC, el **Comando Rojo** (Comando Vermelho), la MS 13 y Barrio 18. Entre mayores sean las políticas meramente represivas, más hacinado estará el ya sobrepoblado sistema penitenciario en Latinoamérica, junto con los reclutas para las pandillas carcelarias.

El auge del negocio de la droga, en particular la cocaína, ha atraído a compradores internacionales. En una extensa investigación que publicaremos en 2019, hemos rastreado la presencia de mafias internacionales, especialmente las europeas, quienes han reforzado su presencia en Latinoamérica, con el ánimo de comprar narcóticos en directamente a la fuente, para asegurar precios reducidos y maximizar sus ganancias. La presencia de mafias viejas y consolidadas no solo aumentará el aprendizaje criminal, sino también la cooperación y las ganancias, creando amenazas aún mayores para los gobiernos en la región.

Las ramificaciones criminales con el colapso de Venezuela no harán más que expandirse con el tiempo. El reclutamiento por parte del crimen organizado de venezolanos que huyen está en aumento. Prepárense para la evolución de una nueva oleada de estructuras del crimen organizado venezolano, que sacan una tajada de los millones de compatriotas desesperados que se dispersan por toda Latinoamérica y más lejos. Una red criminal lista para usar, urdida por la desesperación y la necesidad.



Haga clic [aquí](#) para ver una versión más grande de este mapa

Una tendencia en alza es el hecho de que algunas de las estructuras criminales más sofisticadas, dirigidas por los colombianos, han llegado a la conclusión de que la mejor protección para su negocio no es un ejército privado, sino el anonimato. Están optando por mantener bajísimos perfiles, minimizar la violencia, maximizar la corrupción y evitar la identificación. A esa cuarta generación de organizaciones narcotraficantes en Colombia, las hemos llamado los “Invisibles”. ¿Cómo se combate un enemigo que no se puede identificar, y mucho menos, hallar?

Imagen destacada: Una mujer sostiene un cartel con el retrato del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el que se lee: “Vergüenza nacional”
AP Photo/Moises Castillo

La fundación InSight Crime

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

- Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;
- Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;
- Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
- Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más amplia;
- Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado;
- Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org

InSight Crime
Centro de Investigación
de Crimen Organizado